



Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)

La presente obra está bajo una licencia:
Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)

Para leer el texto completo de la licencia, visita:
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/co/>

Usted es libre de:



Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra
hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:



Atribución — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).



No Comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

**DECISIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Y LA APLICACIÓN DE PRINCIPIOS INTERNACIONALES EN EL CASO
SANTO DOMINGO VS COLOMBIA**

Presentada por:

ANDRÉS AUGUSTO HARKER DURAN

Director

JAIME ALFONSO CUBIDES CARDENAS

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA

**MAESTRIA EN DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO**

BOGOTÁ DC

2019.

**DECISIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Y LA APLICACIÓN DE PRINCIPIOS INTERNACIONALES EN EL CASO
SANTO DOMINGO VS COLOMBIA^{1*}**

Andrés Augusto Harker Duran^{2}**
Universidad Católica de Colombia.

Resumen

La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano jurisdiccional que conoce de casos a nivel internacional y que juzga Estados, sin embargo esta se debe adaptar y regular lo pertinente, acorde con los principios internacionales del Derecho Internacional Humanitario; es decir que esta corporación, en estricto sentido no conoce del DIH pero ella misma ha abierto su competencia sobre la aplicación del mismo a temas relacionados directamente con el Conflicto Armado, en atención a su insatisfacción en la solución entregada a la problemática por el Derecho interno en forma incierta e inoportuna, con el único objeto de encontrar una seguridad jurídica.

^{1*}El presente documento de investigación se presenta con el propósito de obtener el título, de Magister en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; en atención a aplicación del derecho internacional humanitario en la jurisprudencia por parte de la corte interamericana de derechos humanos en la aplicación de los principios internacionales del Derecho Internacional Humanitario. Afirmando de tal manera que este cómo órgano regional de control de Derechos Humanos se constituye centro de control en dirimir las situaciones presentadas en el Conflicto Interno Armado, herramienta que cumple una función especial para dar respuesta a los problemas asistidos a su jurisdicción. Trabajo de grado resultado del Proyecto “*Desafíos contemporáneos para la protección de Derechos Humanos en escenarios de posconflicto desde enfoques interdisciplinarios*”, perteneciente a la línea de Investigación: “Fundamentación e implementación de los Derechos Humanos” del Grupo de Investigación: “Persona, Instituciones y Exigencias de Justicia” con código COL0120899 con Categoría A1 en Convocatoria 781 de 2017 de Colciencias y el cual, está vinculado al Centro de Investigaciones Socio Jurídicas de la Universidad Católica de Colombia (CISJUC). Fungió como Director el profesor Jaime Alfonso Cubides Cárdenas y de codirectora la profesora Tania Giovanna Vivas Barrera.

^{2**} Abogado de la Universidad Santo Tomas de Bucaramanga, especialista en Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia, Estudiante de la Maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Correo electrónico: harkerduran@hotmail.com

El artículo indicará un análisis desplegado de acuerdo al actuar por el órgano de control internacional; donde refiere una implementación en la aplicación de los principios de: *Limitación, Necesidad Militar, Humanidad; Distinción, Proporcionalidad; Precaución* y el de *Protección al Medio Ambiente*, con el fin de mostrar estas reglas integradas en las decisiones a casos fallados, basados en los principios básicos del DIH.; así mismo haremos uso de las referencias compiladas en los grupos interesados e incluidos de la verdad legítima; repasaremos los contextos de convencionalidad de los DDHH en el DIH; se desarrollarán reseñas específicas y detalladas de la CIDH en el empleo de la jurisprudencia al DIH. A lo cual el interrogante será basado en atención al caso de la referencia, en el alcance que tienen las decisiones de la CIDH y los principios del DIH en el caso de la masacre de Santo Domingo Vs Colombia.

Palabras Clave: *Corte Interamericana De Derechos Humanos, Derecho Internacional humanitario Jurisprudencia, Principios, Conflicto Interno Armado.*

THE APPLICATION OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN THE JURISPRUDENCE OF THE INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS.

Abstract

The Inter-American Court of Human Rights is a jurisdictional body that is aware of cases at an international level and that judges States, however this should be adapted and regulated as appropriate, in accordance with the international principles of International Humanitarian Law; that is to say that this corporation, in a strict sense, does not know about IHL but has opened its competence on the application of it to issues directly related to the Armed Conflict, in view of its dissatisfaction in the solution delivered to the problem by domestic law in an uncertain and inappropriate manner, with the sole purpose of finding legal certainty.

The article will indicate an analysis displayed according to the action by the international control body; where it refers an implementation in the application of the principles of: Limitation, Military Need, Humanity; Distinction, Proportionality; Caution and Environmental Protection, in order to show these rules integrated in decisions to failed

cases, based on the basic principles of IHL .; We will also make use of the references compiled in the interested and included groups of the legitimate truth; we will review the contexts of conventionality of human rights in IHL; specific and detailed reviews of the IACHR will be developed in the use of IHL jurisprudence. To which the question will be based on attention to the case of the reference, the scope of the decisions of the IACHR and the principles of IHL in the case of the Santo Domingo massacre Vs Colombia.

Key words: *Inter-American Court of Human Rights, International Humanitarian Law, Jurisprudence, Principles, Armed Internal Conflict.*

Introducción

Es de anotar que a lo largo de los años la CIDH, ha mostrado gran atención a los casos acaecidos con el DIH en relación a los asuntos determinados con el conflicto interno armado, lo cual ha marcado diferencia en los juicios decididos en el oficio contencioso; como se demuestra en la jurisprudencia, donde ha marcado un camino en las decisiones presentadas por este órgano colegiado, como se pueden observar en los enunciados a continuación:

“Caso Las Palmeras Vs. Colombia Sentencia de 4 de febrero de 2000; Caso Vásquez Durand Y Otros Vs. Ecuador Sentencia De 15 De febrero De 2017; en los casos Paniagua Morales y otros. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37, párr. 136 y Villagrán Morales y otros. Sentencia de 12 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 252, la Corte declaró la violación de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura³, la cual atribuye competencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Caso Genie Lacayo. Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 23, párr. 81. 5 Caso Suárez Rosero. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 73 y Caso Paniagua Morales y otros, supra nota 3, párr. 155 [...]

[...] El concepto de obligaciones erga omnes ya ha marcado presencia en la jurisprudencia internacional, como lo ilustran, en lo que concierne a la Corte Internacional de Justicia, sus

³ El Sistema Internacional de Derechos Humanos está integrado por un amplio cuerpo normativo y por los organismos encargados de su aplicación y promoción. El cuerpo normativo está compuesto, en el caso del Sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales (1966), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966); además de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), entre otros. Adicionalmente, existen sistemas regionales de derechos humanos como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuyos principales instrumentos de protección son: Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (1948), Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969). (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 2014, p.29).

Sentencias en los casos de la Barcelona Traction (1970), de los Ensayos Nucleares (1974), de Nicaragua versus Estados Unidos (1986), del Timor Oriental (1995), y de Bosnia-Herzegovina versus Yugoslavia (1996), y los argumentos de las partes en los casos del Camerún Septentrional (1963) y de África Sudoccidental (1966), así como su Opinión Consultiva sobre Namibia (1971) y los argumentos (escritos y orales) atinentes a las dos Opiniones Consultivas sobre las Armas Nucleares (1994-1995). Sin embargo, a pesar de las referencias distintas a las obligaciones erga omnes en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, esta última no ha extraído todavía las consecuencias de la afirmación de la existencia de tales obligaciones, ni de sus violaciones, y tampoco ha definido su régimen jurídico. Entre otras” (Corte Interamericana de Derechos Humanos. San José, de Costa Rica. 2017).

Es de anotar la correlación que tienen los casos presentados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos⁴, puesto que dicho ente regulador dispuso y gracias al mismo fue adoptada en 1969 esta decisión, donde Colombia como país signatario firmo el 22 de Noviembre del mismo año, con ratificación/adhesión del 28 de Mayo de 1973, mediante deposito del 31 de Julio 1973 RA, con una aceptación de competencia de la Corte del 21 de Junio de 1985 y aceptación de competencia de la comisión del artículo 45 signada en la misma fecha, donde se sentaron las esperanzas tanto para hombres como mujeres con el fin de generar un organismo que fuera en defensa y protección internacional de los Derechos Humanos, atendiendo al resguardo del Derecho a fin como lo es el de la dignidad de la persona humana⁵, signado en nuestro texto constitucional. Colombia (1991) Constitución Política; ajustados a todos los mecanismos presentados para garantizar su aplicación; donde muestra una diferencia muy marcada.

⁴ “Ese nuevo instrumento sería, en su hora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Debió transcurrir una década para que la Convención adquiriese vigencia y se instalara el flamante Tribunal en San José. Cuando esto aconteció, el Presidente de Costa Rica, don Rodrigo Carazo Odio, pudo decir: “Hoy es un día histórico para el Continente Americano”. En efecto, había culminado la primera etapa de los esfuerzos empeñosos y prolongados que se propusieron ese objetivo plausible. Pero sólo se había recorrido una pequeña parte del camino. Aguardaba la etapa más larga, relevante y decisiva. Esta comenzó entonces y prosigue hasta ahora. Muchos años aguardan”. (CIDH, 2005. p. 3).

⁵ La violencia que ha marcado la historia de nuestro país ha afectado no solo a los combatientes, sino que ha tocado con frecuencia a la población civil de manera brutal. La sociedad se ha ido empoderando y reconociendo a sí misma como un actor con una voz legítima para exigir el respeto por normas fundamentales que protegen la dignidad humana, haciendo más un llamado condenatorio a acciones concretas que al respeto de normas abstractas. Pero, cuando ellos actúan como colectivo, como sociedad civil, ¿a qué cuerpo específico de derechos apelan? Por supuesto a los Derechos Humanos, pero no siempre con la claridad sobre las matizaciones que estos adquieren en situaciones de conflicto. (Ramírez, A, 2010.p.93).

Ya en lo que se refiere a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH), en la presente investigación es directamente proporcional el desarrollo entre el Derecho Internacional Humanitario (de ahora en adelante referido como DIH⁶) y la aplicación de los siguientes numerales en la Convención Americana de Derechos Humanos: Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos.), Artículo 19 (Derecho de niño), Artículo 21 (Derecho a la propiedad privada), Artículo 22 (Derecho de circulación y de residencia), Artículo 25 (Protección Judicial), Artículo 4 (Derecho a la vida), Artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal), Artículo 8 (Garantías Judiciales), el cual ahora ha ampliado sus alcances actuando como un empoderado a nivel internacional, mientras que el campo de acción de la CIDH tiene unas herramientas más limitadas, entendiéndose que por tal razón el CIDH llega a preservar sus Derechos como complemento a las reglas existentes.

Fundamentalmente es importante aclarar que en atención al uso de las herramientas de la CIDH, referencia dos puntos que muestran acercamientos discordantes así; inicialmente constituye el DIH en medida de adhesión a la *ratio decidendi* en la CIDH; vinculando visiblemente la jurisprudencia de fondo a competencias y obligaciones del reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado; siendo estas aplicadas de acuerdo a acciones, o consecuencias presentadas que a ello les corresponda; como también en segundo lugar, emplea el DIH íntegramente, obteniendo la trascendencia y alcance de los Derechos Humanos, de ahora en adelante DH, y los deberes colectivamente de los Estados contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos⁷.

⁶ Parte importante del derecho internacional público, el derecho internacional humanitario es el conjunto de normas cuya finalidad, en tiempo de conflicto armado es, por una parte, proteger a las personas que no participan, o han dejado de participar, en las hostilidades y, por otra, limitar los métodos y medios de hacer la guerra. Para ser exactos, por derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados, el CICR entiende las normas internacionales, de origen convencional o consuetudinario, especialmente destinadas a solucionar los problemas de índole humanitaria que se derivan directamente de los conflictos armados, internacionales o no, y limitan, por razones humanitarias, el derecho de las partes en conflicto a utilizar los métodos y medios de hacer la guerra de su elección y protegen a las personas y los bienes afectados o que pueden verse afectados por el conflicto. (Comité Internacional de la Cruz Roja. 2005 págs. 3, 6,17).

⁷ Tal y como sucedió a nivel internacional, la CADH representa la culminación de un proceso en el continente americano que inició al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados se reunieron en México y decidieron que una declaración sobre derechos humanos debería ser redactada, para que pudiese ser eventualmente adoptada como convención. En noviembre de 1969, en San José de Costa Rica, se llevó a cabo la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. En ella, los delegados de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos redactaron la Convención Americana sobre

A lo que se ajusta para resolver disposiciones al momento de la defensa de los Derechos fundamentales permitidos en esta jurisdicción, a los Estados que han aceptado y ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos como órgano competente, de ahora en adelante CADH, adhiriéndose a acatar con todos y cada uno de los compromisos universales, obligándose a los deberes, situando como práctica el respeto y protección realizado en el Sistema Internacional de Derechos Humanos⁸ incorporando e integrando de manera clara, precisa y concisa la jurisprudencia de la CIDH a su normatividad interna, otorgándoles a estos un estatus de jerarquía de carácter constitucional que se verá reflejado directamente en sus decisiones.

Por supuesto el cuestionamiento sobre el particular va dirigido a su trascendencia, presentada en las disposiciones determinadas por la CIDH en el caso de la masacre de Santo Domingo Vs Colombia; así colocando en práctica los principios del DIH para el caso que nos atañe.

Después de realizar un análisis fáctico, recorriendo paso a paso los casos que ésta corporación atiende, se puede observar la decisión con fundamentos a cada situación en concreto, en juicio a los razonamientos que establece la utilización del DIH por parte de la CIDH; anotando que dicho manejo ha sentado un precedente histórico, el cual hace creer que se mantendrá vigente continuamente sin manifestaciones en contrario, con el objetivo de esclarecer la situación presentada y reparar si es el caso por parte de los responsables a las víctimas de la siguiente manera:

[...] Con la también denominada “Ley de Víctimas” se pretende instituir una política de Estado en materia de asistencia, atención, protección y reparación integral a las víctimas de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de

Derechos Humanos, la cual entró en vigor el 18 de julio de 1978, al haber sido depositado el undécimo instrumento de ratificación. (Steiner, C. y Uribe, P. 2014 p.6).

⁸ La Carta de las Naciones Unidas posicionó a los derechos humanos como un elemento fundamental en la esfera de las obligaciones internacionales, este fue el primer instrumento que empleó la terminología ‘derechos humanos’.⁹ Dentro de los propósitos de esta organización se encuentra incluir la cooperación en la “promoción y alentar el respeto por los derechos humanos”.¹⁰ El artículo 55 es el más importante en este ámbito pues establece que la Organización debe promover: “(c) el respeto universal por, y la observancia de, los derechos humanos y las libertades para todos sin discriminación alguna por motivos de raza, sexo, idioma o religión”. El artículo 56 establece que: “Todos los miembros se comprometen a emprender acciones de forma conjunta o separada en cooperación con la Organización para el logro de los propósitos establecidos en el artículo 55”. (Convención Americana sobre Derechos Humanos. 2014 p. 5).

Derechos Humanos o de Infracciones al Derecho Internacional Humanitario con un enfoque diferencial, acceso a la justicia y conocimiento de la verdad, ofreciendo herramientas para que aquellas reivindiquen su dignidad y desarrollen su modelo de vida”. (Corte Constitucional. (29 de marzo de 2012). Sentencia C-253A/12. Referencia: expedientes D-8643 y D-8668 [M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo].

De manera articulada los casos antes enunciados con relación a la CIDH expresando su interés intrínseco al DIH, ya que desde comienzos del siglo 21, un tema de referencia como lo son casos Las Palmeras vs Colombia⁹ y también La Masacre de Santo Domingo vs Colombia¹⁰ entre otros, donde confrontó en el primero mencionado siendo este donde por vez primera la CIDH se atrevió a enfrentarse utilizando como medio viable el DIH, aplicando de acuerdo a su autonomía los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario; los cuales en esta investigación, donde conforme a los antecedentes descritos, corresponde a este órgano jurisdiccional por competencia precisar su interés de manera manifiesta a estos preceptos como guía.

Actos por los cuales ha sido confrontada ya que las reglas utilizadas como mecanismo de protección por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos están sujetas a unos principios para presentar en el desarrollo como respuesta plena, y oportuna

⁹ Los hechos del presente ocurrieron el 23 de enero de 1991 en la localidad de Las Palmeras. El Comandante Departamental de la Policía de Putumayo ordenó a miembros de la Policía Nacional y del Ejército llevar a cabo una operación armada en dicho lugar. - Los miembros de la Policía y el Ejército acudieron a una escuela rural donde detuvieron y asesinaron a Artemio Pantoja Ordóñez, Hernán Javier Cuarán, Julio Milciades Cerón Gómez, Edebraiz Cerón Rojas, William Hamilton Cerón Rojas, Hernán Lizcano Jacanamejoy y Moisés Ojeda. Sus familiares presentaron una serie de recursos. El proceso disciplinario absolvió a todas las personas involucradas. Asimismo, se iniciaron dos procesos contenciosos administrativos en los que se reconoció que las víctimas del operativo armado no pertenecían a ningún grupo armado. Finalmente, se llevó a cabo un proceso bajo la jurisdicción penal internacional, el cual sigue en etapa de investigación. (Caso Las Palmeras vs Colombia. Corte Interamericana de Derechos Humanos. San José, de Costa Rica. 2017).

¹⁰ Los hechos del presente caso se iniciaron el 13 de diciembre de 1998 en el marco de un operativo militar de las fuerzas armadas colombianas. Un helicóptero lanzó un dispositivo cluster de tipo AN-M1A2 compuesto por granadas o bombas de fragmentación AN-M41A sobre la calle principal de Santo Domingo lo que ocasionó la muerte de 17 personas, incluyendo niños y niñas, y 27 heridos. - El mismo 13 de diciembre muchas personas de Santo Domingo tuvieron que abandonar sus residencias y movilizarse al corregimiento de Betoyes en el municipio de Tame. Además, la Fuerza Aérea Colombiana realizó ametrallamientos desde las aeronaves contra personas que iban en dirección opuesta al caserío. El Tribunal Contencioso Administrativo estableció la responsabilidad del Estado. Asimismo, fueron condenados tres autores materiales. (Corte Interamericana de Derechos Humanos. San José, de Costa Rica. 2017. Caso La Masacre de Santo Domingo vs Colombia).

en los casos atendidos por su competencia, siendo así que las medidas emitidas por un tribunal internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos; al Derecho Internacional Humanitario, han construido múltiples sentencias que demuestran la importancia trascendida encaminada a un hecho real, adicionalmente el empleo e implementación acerca de los principios internacionales del Derecho Internacional Humanitario.

Siendo el soporte en búsqueda de optimizar las herramientas que asisten para este tribunal jurisdiccional experimentado dispuesto por ley, ratificando la presencia del conflicto armado; expresando su relación con el Derecho Internacional Humanitario, confirmando y teniendo en cuenta el recurso judicial adecuado para exigir el cumplimiento de órdenes de medidas de reparación emitidas por este órgano colegiado de carácter internacional.

[...] Para resolver los problemas así planteados, estima necesaria referirse a: (i) la sentencia correspondiente al “Caso 19 Comerciantes vs. Colombia”, de 5 de julio de 2004, y las resoluciones de 2 de febrero de 2006, 26 de noviembre de 2008, 8 de julio de 2009 y 26 de junio de 2012, dictadas para evaluar su cumplimiento; (ii) el alcance de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ordenamiento colombiano. Acto seguido, (iii) hará algunas consideraciones sobre el derecho a la memoria; y (iv) analizará la procedencia de la acción de tutela para demandar el cumplimiento de una medida de reparación simbólica ordenada por la Corte IDH. Por último, (v) estudiará el caso concreto. (Corte Constitucional. (23 de agosto de 2012). Sentencia T-653/12. Referencia: expediente T-3408860. [M.P. Jorge Iván Palacio Palacio].

En referencia al tema expuesto, la pregunta de investigación de este documento será: ¿Cuál es alcance de las decisiones de la Corte Interamericana y de los principios del derecho internacional humanitario en el caso de la masacre de santo domingo Vs Colombia?

En cuanto a aplicación y pertinencia que tienen los principios del DIH, se hace importante cuestionarlo, en el sentido de capitular la protección del Derecho de los Derechos Humanos, como fin esencial de una justicia equitativa, usando de una manera especializada los instrumentos necesarios como lo son los principios del *Derecho*

Internacional Humanitario, con lo que se pretende analizar uno a uno explicando su empleo al momento de ser ejecutados en los diferentes escenarios donde afectan directamente a quienes son denominados víctimas quienes al final son los más perjudicados, expuesto así:

[...] A continuación, sostiene “el conflicto armado interno que desde hace muchos años se libra en el territorio de la República de Colombia tiene varias dimensiones, y en cada una de ellas son fácilmente apreciables múltiples consecuencias dañinas. En ese conflicto se interrelacionan diversos factores que tienden a nutrir su reproducción; las ideologías justificadoras de la violencia, las exclusiones políticas, económicas y sociales, la reproducción y el tráfico de drogas, el comercio ilícito y la proliferación de armas, el peso de otros intereses económicos y el empleo de la guerra como *modus vivendi*. // Por regla general, las principales víctimas de los conflictos armados son la población civil, en ese orden, surge la obligación de actuar conforme lo dictamina el Derecho Internacional Humanitario.” (Corte Constitucional. (10 de octubre de 2012) Sentencia C-781/12. Referencia: expediente D-8997. [M.P. María Victoria Calle Correa].

Proponiendo a que estos se ajusten, aclarando y creando un precedente; a consideración de los impactos que se susciten, con un ingrediente especial como lo es los casos vinculados al Conflicto Interno Armado, aportando en la disminución y solución a la problemática que impacta al no tener conocimiento en la función de los principios antes expuestos; por lo que es necesidad identificar los hechos violatorios de los Derechos reconocidos a que este órgano judicial autónomo del sistema interamericano de Derechos Humanos los cuales admite estudia y resuelve.

Como se ha reseñado al inicio de este escrito, en el año 2000 inicialmente donde se presenta un encadenamiento en razón al Caso *Palmeras vs Colombia* antes mencionado, considerando este como punto de partida para los asuntos de Conflicto Interno Armado relacionados al DIH, identificando y aclarando dos acercamientos disímiles por una parte como mecanismo accesorio complementario de consecuencia de valor la CIDH determina el empleo al DIH; y por otro lado es vinculado de manera sensata de acuerdo a la realidad el DIH en los efectos presentados ante los casos por decidir en reconocimiento donde es de incumbencia la responsabilidad internacional Estatal en su conjunto.

Demostrando acciones inmediatas y eficaces en pro de dar pronta solución al escenario actual, teniendo en cuenta el panorama de magnos desafíos en la administración de justicia ya que se violan los Derechos y bienes jurídicos tutelados siendo esta la causa de mayor controversia, simplemente verificado en una denuncia, la cual no procede en las instancias judiciales internas (Derecho Interno¹¹), por lo que se decide entablar acciones judiciales internacionales, corporaciones que velarán por la defensa legal haciendo uso de los mecanismos y conceptos hábilmente manejados para entregar seguridad jurídica en el desarrollo del proceso del cual hay presencia de la vulneración de sus Derechos Humanos e identificación de los infractores del Derecho Internacional Humanitario.

Hipótesis

El alcance que tiene la presente investigación a discusión, se centra en la identificación de los modelos existentes en la noción de la correlación del DIH, dispuesto por la CIDH, dando la aplicabilidad de los principios internacionales del Derecho Internacional Humanitario; adaptados a la jurisprudencia empleada para los caos presentados en vulneración del Conflicto Interno Armado, apoyado sus mecanismos; obteniendo el desarrollo de cada proceso presentado, resuelto de manera objetiva; después que no surtió efecto el ordenamiento jurídico interno, de cada país.

De acuerdo a los elementos con los cuales se da para la aplicabilidad pertinente para la defensa de los Derechos alcanzando la justicia en equidad, establecen el hecho real; por lo que se entrará a dilucidar los compendios, las herramientas, su relación, el compromiso, las referencias, los contextos, el desarrollo, la jurisprudencia y los principios utilizados por La Corte Interamericana De Derechos Humanos al Derecho Internacional Humanitario,

¹¹ Una de las primeras y mínimas afirmaciones que parece así inevitable hacer es que estas normas constituyen no solamente derecho supranacional sino también y cuanto menos, al propio tiempo, derecho interno, vigente, operativo, aplicable de pleno derecho a toda situación que quepa encuadrar en sus normas, en tanto éstas tengan un contenido que no sea manifiesta e indiscutiblemente programático. Esa adicional nota de derecho interno es ahora de nivel constitucional. La Convención y otras normas supranacionales tienen así el doble carácter señalado, que implica la obligación de las autoridades nacionales de aplicarlas, sin perjuicio de la aplicación que también harán de ellas las autoridades judiciales supranacionales existentes según el caso (Gordillo, A. 2000 Capítulo VIII p. 22)

dentro del contexto del Conflicto Interno Armado, entendido este de acuerdo a su marco normativo como sentido estricto, a lo cual:

[...] Resalta la Corte Constitucional, la función jurisdiccional de la Corte IDH se enmarca, entre otros objetivos, dentro del artículo 22 de nuestra Constitución, que reconoce la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Si así es, el acatamiento de las decisiones emanadas de los tribunales internacionales es una garantía de paz. Ahora bien, los derechos humanos reconocidos en la Convención pertenecen a lo que esta Corte ha llamado bloque de constitucionalidad en sentido estricto. De acuerdo con el contenido del artículo 93 superior, las normas que contiene se entienden incorporadas al ordenamiento interno y surten efectos directos. Al aplicar el concepto de bloque de constitucionalidad, la declaratoria que hacen los jueces de la CIDH no solo repercute sobre la esfera internacional sino sobre el ordenamiento interno. Así, la violación declarada por la Corte Interamericana surte efectos en el ámbito de las relaciones entre países soberanos y miembros de la OEA –donde se reconoce a la nación como infractora- y, a la vez, proyecta directamente consecuencias dentro del Estado. En diversos fallos esta Corporación se ha referido puntualmente a la CIDH, indicando que su jurisprudencia es un criterio relevante para fijar el parámetro de control de las normas que hacen parte del ordenamiento interno colombiano, precisamente porque establece el alcance de distintos instrumentos internacionales de derechos humanos. La Corporación ha sostenido que la jurisprudencia de la CIDH, es un instrumento internacional que integra el parámetro de control de constitucionalidad. (Corte Constitucional. (23 de agosto de (2012). Sentencia T-653/12. Referencia: expediente T-3408860 [M.P. Jorge Iván Palacio Palacio].

La CIDH es competente para aplicar las disposiciones de los tratados que le otorgan competencia contenciosa (la CADH, entre otros). En relación con el DIH, la CIDH ha planteado su relevancia y pertinencia para analizar casos ocurridos en un conflicto armado y, en esta medida ha declarado su competencia para interpretar el DIH, pero no para declarar su incumplimiento. De los 189 casos que ha decidido, en 33 identificó que habían ocurrido en un contexto de conflicto armado no internacional; y de estos 33, sólo en 15, la Corte incorporó criterios y conceptos del DIH para facilitar la comprensión del caso y para adoptar una decisión consistente con la *lex specialis* aplicable.

La utilización del DIH ha ido en aumento; sin embargo, su aporte para la comprensión de un caso ocurrido en un contexto de conflicto armado no ha sido suficientemente aprovechado por la Corte IDH: o no ha usado el DIH o cuando lo ha hecho

salvo contadas excepciones, su utilidad fue prácticamente formal y enunciativa y no representó un aporte sustantivo. (Bravo, 2015, P.IX).

Como también al referirnos a nuestro país es claro el aceptar, las variadas contrariedades de rango constitucional que se presentan, el sinnúmero de violaciones a Derechos Humanos a cada instante, donde desafortunadamente la administración Estatal tiene la obligación fundamental de ampararlos lo que no ha podido conseguir a lo largo del tiempo, mencionado así:

[...] Los derechos de las víctimas del conflicto armado colombiano “son fundamentales y tienen protección constitucional. Es por ello que el Estado tiene como deber garantizar su protección y ejercicio estableciendo medidas les permitan a los afectados conocer la verdad de lo ocurrido, acceder de manera efectiva a la administración de justicia, ser reparados de manera integral y garantizar que los hechos victimizantes no se vuelvan a repetir”. (Corte Constitucional. (13 de febrero de 2017). Sentencia T-083/17. Referencia: Expediente T-5.711.182 [M.P. Alejandro Linares Cantillo].

Ya que como se mencionó anteriormente, siempre ha sido suplido por las autoridades de jerarquía y control internacional, con el único objeto de articular la protección y seguridad jurídica de nuestra institucionalidad; se llevará a cabo será el de principios de Limitación, Necesidad Militar, Humanidad; Distinción; Proporcionalidad; Precaución y por último el de Protección al Medio Ambiente, y así determinar el uso de ellos para la existencia del conflicto Armado, por medio de infraestructura y la disparidad que entre los componentes normativos en el campo interno acaecen, coadyuvando e interviniendo para que se realicen reformas legislativas con los fallos emitido desde esta alta corporación internacional, como se presenta en jurisprudencia por la CIDH en él.

Con lo que se dejará antecedente para estabilizar situaciones futuras sobre este particular en la práctica del proceso interno esperando que se cree un sentido de pertenecía institucional a las personas que son objeto del sistema y sean defendidos con una asistencia de carácter general, pero precisa y efectiva.

Metodología

El método deductivo será el utilizado, el cual determinará cada uno de los sucesos fundamentales por medio del análisis en atención al fenómeno a profundizar; en el entendido de la formación de una inferencia del cual se expresa explicar la demostración del suceso propio presentado, con el fin de verificar y comprobar la veracidad de los específicos propuestos. Indicando cuyo propósito que estará orientado en el desarrollo del estudio, el cual se orientará en la aplicación de las reglas en la Jurisprudencia de la CIDH.

En atención al uso de los principios internacionales del DIH; de acuerdo a sus funciones cumplimiento y finalidad; ajustado a su soberanía y poder de decisión, como órgano judicial autónomo del SIDH; como componente de seguridad jurídica y garante en la protección, logrando evitar así múltiples transgresiones a los DDHH en el contexto del Conflicto Interno Armado; el cual sirve de guía y contención a cada situación, en sentido de identificar los límites específicos de un estudio; como también al solucionar cada interrogante, donde se interrelaciona con este tipo de investigación inicialmente mencionado. Igualmente es importante sentar como precedente la jurisprudencia que se presentará de caos ya fallados por parte de la Corte, donde se demuestra el poder de decisión del cual hace parte del marco principal de este documento.

1. Los compendios de la corte interamericana de derechos humanos determinado en la aplicabilidad del derecho internacional humanitario.

Para entender cómo funcionan dichos compendios en el ámbito de aplicabilidad del DIH y viceversa, se debe tener muy en cuenta que si bien es cierto el ideal es que se apliquen sin excepción alguna las directrices y reformas que declara nuestro ente de control a tratar, no se puede omitir el hecho de que existen situaciones en las cuales los derechos pueden ser vulnerados con extrema o poca facilidad y que el contexto que se ha determinado es un tanto más complejo por no decir que uno de los más extensos, ya que definitivamente comparado con casos normales el Conflicto Armado conlleva una serie de ratificaciones adicionales que se han de considerar en este y los siguientes apartados.

Sin embargo, como afirman los autores; el Derecho internacional, como todo ordenamiento jurídico, debe contar con normas y mecanismos que regulen las violaciones de sus mandatos y sus consecuencias, no sólo para el autor, sino también para sus víctimas, y en su caso para la comunidad internacional en su conjunto (Gutiérrez y Cervell, 2012). Pues bien, se entiende que en un ambiente de guerra difieren algunas pautas ya que las doctrinas y la jurisprudencia en torno a este la argumentan insistiendo en sus delimitaciones y pautas distintas y adversas aun cuando podamos observar que dicho conflicto ha pasado a un segundo plano.

No es menos relevante el DIDH, pues para nuestro tema es fundamental ver la cabida del mismo puesto que un suceso como lo es el Conflicto Armado, relacionado directamente con vulneraciones de todo tipo, requiere una minuciosa evaluación, a partir de que estos avances son soportados por la Corte Interamericana y otros entes de control con la finalidad de encontrar ese equilibrio en donde sea posible determinar lo justo sin que la subjetividad que acompaña al ser humano por naturaleza interfiera en alguna decisión. Es de nuestro total conocimiento que aun sin estar vigente tal conflicto, la demanda de reparación parcial o total de las poblaciones se encuentra por defecto con un diagnostico profundo de lo que solicita y lo que está dispuesto a dar cada parte.

Referente a la legalidad en torno a esta temática es posible relacionar aproximaciones distintas como lo son el hecho de que el DIH complementa a la Corte Interamericana, es decir, su contenido más que en su transcendencia en lo concerniente a deberes generales y materia de Derechos con respecto a un Estado reconocido y por otra parte la proximidad esperada en la que el Derecho Internacional Humanitario. Se incluye de manera verídica en la lógica de este ente de control y que al ser este incluido de lleno (de fondo y de forma) sea más que tan solo un ejercicio académico.

En cuanto al Conflicto Interno Armado tenemos como una instancia que difiere de un conflicto de estirpe internacional y es el hecho de que aquellos individuos que participan de manera activa en el mismo, en causa legal, quedan expuestos a tal punto de ser objeto de ataque. Este punto debe ser tratado con detenimiento, pues es aquí cuando se denota hasta

donde es el límite de acción del DIH y del DDH. Es así como la Corte en base a dichos compendios juega el papel de fundamentar porque aplicar X o Y reforma sin que se defina como extralimitación u omisión alguna en torno a estos mecanismos de control y que prime el Derecho Internacional sobre el Derecho Humanitario convencional.

Ciertamente la Corte Interamericana de Derechos no es el único ente que tiene encomendada la labor de atender estos asuntos. Trabajando de la mano con demás órganos de control se estima que no solo se supervise, sino que se promueva y se promoció de modo textual lo que el *ius cogens* determina a efectuar en estos casos. Es ahí cuando debe ampliarse el horizonte del marco normativo, ya que definitivamente precisamos con urgencia determinar si los demás órganos (Consejo económico y Social y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, etc.) están del todo en capacidad de aplicar en relación directa con sus funciones aquellas normas.

En sus informes presentados ante la Asamblea para el Seguimiento de la Cumbre del Milenio, celebrada en Nueva York entre el 14 y el 16 de septiembre de 2005, el Secretario General de las Naciones Unidas, KOFI ANNAN, propuso a los Estados miembros una reforma en profundidad de la Organización mundial, que incluía la creación de un nuevo órgano, el Consejo de Derechos Humanos. Partiendo de la estrecha vinculación que existe entre la paz y la seguridad, el desarrollo y la protección de los derechos humanos, el Secretario General promovía que en las Naciones Unidas se establecieran tres Consejos con un poder equilibrado, encargados, respectivamente, de la paz y la seguridad internacionales; las cuestiones económicas y sociales, y los derechos humanos (Ochoa y Salamanca, 2006).

Es de conocimiento para quienes se encuentran de lleno en la materia de Derechos Humanos que las organizaciones que se encargan de regularlos prefieren hacer una mención más bien superficial de ellos en aras de no usarlos como para dar sustento a sus decisiones, pero si han de reconocer que son necesarios a la hora de ejercer el derecho del derecho humano mismo.

Es de recordar que lo anteriormente mencionado no debe limitarse, ya que a raíz de esta permite conocer algunas de sus causas y entender un poco más lo que motiva a cada una de las partes, se conoce de sobra que se determinen soluciones a raíz de lo evaluado es lo primordial y que, de hecho, no solo tiene esto impacto a nivel legal sino también a nivel social, psicológico, económico y cultural¹². Esto modifica a toda una sociedad de tantas maneras que recapitular hasta ahora lo sucedido es una pequeña parte de este proceso que ha de ser más largo todavía; tomado como reseña de la CIDH el caso “Panel Blanca” Paniagua Morales y otros Vs. Guatemala:

[...] Los hechos del caso ocurrieron entre junio de 1987 y febrero de 1988, en un contexto de detenciones arbitrarias y, en algunos casos, de privación de la vida. En la mayoría de los casos, las personas detenidas eran obligadas a subir, por la fuerza, a un vehículo tipo “panel” (especie de microbús o furgoneta) de color blanco. En dichas detenciones intervinieron hombres armados, vestidos de civil en la mayoría de ellas, vinculados con la Guardia de Hacienda o con alguna institución militar o policial. Ana Elizabeth Paniagua Morales, Julián Salomón Gómez Ayala, William Otilio González Rivera, Pablo Corado Barrientos, Manuel de Jesús González López, Erik Leonardo Chinchilla, Augusto Angarita Ramírez, Doris Torres Gil, José Antonio Montenegro, Oscar Vásquez y Marco Antonio Montes Letona fueron detenidos en diversas fechas. Asimismo, fueron objeto de maltratos y torturas. Cinco de estas personas también fueron asesinadas. Sus cuerpos, con signos de violencia física, fueron abandonados el mismo día o días después de su detención, en las calles de la ciudad de Guatemala y en sus alrededores. A pesar de haberse interpuesto recursos judiciales, no hubo avances significativos en la investigación o en la identificación de los responsables. (Corte IDH, Caso de la “Panel Blanca” Paniagua Morales y otros Vs. Guatemala Sentencia del 8 de marzo de 1998 Fondo).

¹² El Estado en cuestión debe remediar prontamente tal situación, pues, si no lo hace, puede configurarse una "situación continuada" violatoria de los derechos humanos (denunciada en un caso concreto). Es perfectamente posible concebir una "situación legislativa" contraria a las obligaciones internacionales de un determinado Estado (v.g., manteniendo una legislación contraria a las obligaciones convencionales de protección de los derechos humanos, o no adoptando la legislación requerida para dar efecto a tales obligaciones en el derecho interno). En este caso, el *tempus commisi delicti* se extendería de modo a cubrir todo el período en que las leyes nacionales permanecieron en conflicto con las obligaciones internacionales convencionales de protección, acarreando la obligación adicional de reparar los sucesivos daños resultantes de tal "situación continuada" durante todo el período en aprecio. (Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1997-98 p. 141.)

Ya teniendo presente los dictámenes de cada uno de estos mecanismos de control, respecto a dichos compendios cabe aclarar, que es absolutamente necesario que, en lugar de omitir algunas directrices, se defina bien lo que sucede y se contextualice dicha información con el objetivo de que los vacíos legales sean los menos posibles. El hecho de que los agentes del Estado estén ya en el territorio de otro, como ocurre en el caso de las OMP, y la sensación general de vacío legal en muchas de las situaciones examinadas, abre una tentadora vía de acción que, aunque en principio debe ser descartada desde el punto de vista del Derecho internacional, debe ser examinada (Martínez, 2014).

Una vez con aquella recopilación será posible determinar cuáles son los pasos a seguir en todos los contextos. Pareciera que lo más lógico o lo más sencillo sería que hiciéramos caso a nuestra naturaleza, a nuestro instinto de conservación mutua y que se aplicaran los derechos de los seres humanos sin necesidad alguna de que exista alguien o algo que se permita recordarnos como vivir en sociedad con total paz y armonía. Sin embargo, esta es otra viñeta que se tratará más específicamente en títulos posteriores.

2. Herramientas de la CIDH para uso del conflicto interno armado en relación con el DIH.

El Derecho Internacional Humanitario está constituido por principios y normas que limitan el uso de la violencia en períodos de conflicto armado. Los objetivos son proteger a las personas y a los bienes civiles que no están directamente involucradas en las hostilidades y limitar las consecuencias de la violencia en la lucha para alcanzar los objetivos del conflicto (Romero, 2012).

En relación a las herramientas con las cuales se soporta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para establecer ciertos parámetros, las mismas tienen fundamento en aproximaciones conceptuales basadas en casos o conflictos precedentes los cuales ayudaron a determinar, con esquemas existentes que de alguna manera aportan mejores y más eficaces soluciones o, mejor dicho, cuál pudiese ser el mejor manejo de situaciones

adversas similares a futuro. Entre dichas soluciones, el ente que nos compete posee algunos métodos que declaran aportes considerables que observaremos con detenimiento a continuación.

La lectura del reclutamiento como una “opción” oculta la responsabilidad de los grupos armados para quienes la guerra es una verdadera elección (Coalico, 2013). De este modo, podemos decir que si bien es cierto la guerra no es algo que en su sentido más literal defina el tema de los derechos humanos, se encuentra que tiene un impacto tan fuerte en materia de humanidad que no podemos omitir su valor a nivel cualitativo y cuantitativo. Dicho esto, denotamos que no pierden importancia los derechos humanos en materia de jurisprudencia y que en contraparte su vigencia es total y debe ser medida fundamentándose en distintas herramientas. Es así como, en legalidad y en cuanto esté relacionado a contextos de Conflicto Armado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ayuda de algunos ejes como lo son: el Control de Convencionalidad y Jurisdiccional la cual es su función principal.

Definamos el ámbito histórico de lo que no compete. A lo largo de la historia en nuestro continente hemos sido testigos de muchas situaciones en las que las circunstancias han hecho que de una manera u otra se complique la vida liberal por motivos como gobiernos con intenciones de dictadura o, como en este caso particular, la detonación de un conflicto armado. Actualmente, estamos en uno de esos periodos de enaltecimiento del diálogo y la política y ha vuelto a verdear la esperanza, muchas veces contrariada pero nunca sepultada, de conquistar la paz en una mesa de negociación (Gallego, 2012).

Sin embargo, por más medidas que el Sistema Interamericano haya tomado al respecto no se puede negar que ha generado fuerte impacto sobre la sociedad y que cuando específicamente se refiere a uno de tipo interno es de suma importancia en cuanto transcendencia histórica. De parte de la Corte, teniendo en cuenta que prima la parte teórico-práctica a diferencia de la Convención como tal, es de fundamental importancia que dicho conflicto armado y la presencia del mismo dentro de un caso como contexto este apropiadamente comprobado.

Es por esto que en los asuntos correspondidos y sus diversos orígenes o fuentes en relación a un expediente, es donde este ente regulador ha hallado contestaciones no solo en pro de ratificar la vigencia de dicho conflicto interno sino que también para determinar de qué modo, en instancias de carácter interno, ha sido regulado el mismo y es aquí donde la opinión consultativa es uno de los métodos más eficaces para dirigirnos y dirigir a la Corte misma por el camino más eficiente teniendo la facultad de consultar la parte interpretativa de tratados relacionados con la temática del Derecho Humano y la opinión de la Convención.

Retomando el tema de los ejes que de manera concatenada ejercen un fuerte apoyo a la Corte Interamericana (el Control de Convencionalidad y la parte Jurisdiccional), entendemos que la Convencionalidad:

[...] Consiste en verificar la compatibilidad de las normas y demás prácticas internas con la CADH, la jurisprudencia de la CIDH y los demás tratados interamericanos de los cuales el Estado sea parte; b) Es una obligación que corresponde a toda autoridad pública en el ámbito de sus competencias; c) Para efectos de determinar la compatibilidad con la CADH, no sólo se debe tomar en consideración el tratado, sino que también la jurisprudencia de la Corte IDH y los demás tratados interamericanos de los cuales el Estado sea parte; d) Es un control que debe ser realizado ex officio por toda autoridad pública; y e) Su ejecución puede implicar la supresión de normas contrarias a la CADH o bien su interpretación conforme a la CADH, dependiendo de las facultades de cada autoridad pública”. (Corte Interamericana de Derechos Humanos 2007. Cuadernillo de Jurisprudencia N° 7).

Es así como el Control de dicha Convencionalidad permite a los órganos reguladores en materia de derechos humanos hacer una especie de comparativo entre la jurisprudencia y las practicas internas (pues las mismas pueden variar de Estado a Estado) siendo hecha esta exclusivamente por una autoridad competente (de carácter público) aunque la ejecución de una norma implique una posible contradicción o supresión de otras. Esas reformas representan el máximo esfuerzo que podían hacer ambos órganos regionales de protección de derechos humanos, para abrir el sistema al sujeto de protección que

justifica, precisamente, su existencia: la víctima de violaciones a sus derechos humanos. (Faúndez, 2004).

Es aquí donde entra la parte Jurisdiccional y se entiende que ni la Corte ni la Convención pretenden dar o imponer un modelo específico de control de estas convencionalidades; así posteriormente se justifica completamente la remisión de un caso de este tipo a la Corte.

Dentro de los estándares nacionales y la legislación internacional que ofrecen los derechos humanos y derecho internacional humanitario, respectivamente, es preciso destacar que todas aquellas herramientas jurídicas dirigidas a salvaguardar la integridad de la población civil y sus condiciones de subsistencia en medio de un conflicto armado fueron parte del análisis de este documento (Chávez & otros, 2016).

3. El compromiso Estatal demostrado en el reconocimiento sobre su responsabilidad internacional.

En algunas ocasiones el conflicto interno armado y el contexto del mismo se han determinado como hecho que no está sujeto a controversias, puesto que el Estado mismo lo reconoce y le acepta con el nombre de conflicto. La implementación de medidas de seguridad humana basadas en estrategias de cobertura de las necesidades básicas y de autoprotección.

Entre las medidas de autoprotección destacarían las siguientes: el acompañamiento mutuo, apoyo psicosocial, claridad, transparencia y firmeza de su autonomía respecto a las lógicas agresivas de todos los actores armados y del Gobierno, acompañamiento nacional e internacional destacando aquel recibido por la iglesia, interlocución continua con las instituciones nacionales encargadas de la protección de la población exigiendo su responsabilidad, canalización de denuncias al exterior, demarcación simbólica y visible de su territorio, adjudicación de medidas cautelares por parte de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos, mecanismos de protección de defensores de derechos humanos y líderes sociales, amenazados, etc... (Barbero, 2006).

Para entrar en materia de este reconocimiento la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en su reglamento con el Artículo 62.

[...] Si el demandado comunicare a la Corte su aceptación de los hechos o su allanamiento total o parcial a las pretensiones que constan en el sometimiento del caso o en el escrito de las presuntas víctimas o sus representantes, la Corte, oído el parecer de los demás intervinientes en el proceso, resolverá, en el momento procesal oportuno, sobre su procedencia y sus efectos jurídicos. (Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2009).

Fundamentando que una vez el Estado que ha sido demandado recurre a notificar a dicha Corte en consecución del mismo reconocimiento encontramos en el Artículo 64:

[...] La Corte, teniendo en cuenta las responsabilidades que le incumben de proteger los derechos humanos, podrá decidir que prosiga el examen del caso, aun en presencia de los supuestos señalados en los artículos precedentes, aprobado por la Corte en su XLIX período ordinario de sesiones celebrado del 16 al 25 de noviembre de 2000. (Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2009. Artículo 54. Prosecución del examen del caso Capítulo V. Terminación anticipada del proceso.).

Es así como de modo paralelo se haya que en el momento de recibir una respuesta por parte del Estado. Al responder como Estado en una guerra interna no reconocida oficialmente, la eficacia institucional de sus respuestas se torna confusa y deja en evidencia la negación de lo que se suponía su construcción como Estado social de derecho, bajo los principios consagrados en la constitución de 1991. (Chaparro y Galindo, 2009). En atención al escrito presentado mediante investigación sobre el uso de las excepciones preliminares y el reconocimiento de responsabilidad de Perú y Colombia ante la Corte Interamericana. La reflexión seguida a este resultado debe estar marcada por la resistencia continua del Estado colombiano a admitir la aplicación del DIH dentro del conflicto armado interno que vive luego de más de cinco décadas. La eliminación de consideraciones venidas del derecho internacional humanitario constituye para Colombia un arma de defensa internacional pero

quizás uno de los mayores argumentos en contra de una solución pacífica del conflicto (Vivas, 2014).

Es válida como aceptable siempre y cuando ciertos hechos no hayan sido explícitamente negados y lo que se ha pretendido no haya sido declarado como controversial, sin embargo, esto no significa que ha de ser así en todos los casos que se presenten de manera automática aun cuando no hubiese oposición de algún tipo más cuando no concurra una evaluación de los puntos o hechos particulares de cada caso respecto al cumulo probatorio que haya a lugar observar.

Jurisprudencialmente hablando, en términos de la Corte reseña el caso “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala:

[...] Los hechos del presente caso se contextualizan en una época caracterizada por un patrón común de acciones al margen de la ley, perpetradas por agentes de seguridad estatales, en contra de los “niños de la calle”. Esta práctica incluía amenazas, detenciones, tratos crueles, inhumanos y degradantes y homicidios como medio para contrarrestar la delincuencia y vagancia juvenil. El 15 de junio de 1990, en la zona conocida como “Las Casetas”, una camioneta se acercó a Henry Giovanni Contreras, de 18 años de edad, Federico Clemente Figueroa Túnchez, de 20 años, Julio Roberto Caal Sandoval, de 15 años y Jovito Josué Juárez Cifuentes, de 17 años. De dicho vehículo descendieron hombres armados miembros de la policía, quienes los obligaron a subir al mismo. Luego de estar retenidos por unas horas, fueron asesinados. Asimismo, el 25 de junio de 1990 fue asesinado Anstrum Aman Villagrán Morales, mediante un disparo de arma de fuego, en el sector de “Las Casetas”. No se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables de los hechos. (CIDH, Caso “Niños de la Calle” Villagrán Morales y otros Vs. Guatemala. Sentencia Excepciones Preliminares del 11 de septiembre de 1997. 19 de noviembre 1999. Reparaciones y Costas. 26 de mayo de 2001. Caso ante la CIDH Serie C No. 32, Serie C No. 63, Serie C No. 77).

El Estado y su silencio tienen una relación directa con respuestas que solo evaden o que de algún modo son ambiguas y es por ello que técnicamente en la aplicabilidad del contexto colombiano y el conflicto armado interno del mismo. Esta traslación del eje de la seguridad del Estado a la persona se ha dado, en parte, como respuesta a los cambios en la percepción que se tiene de la violencia asociada a los conflictos armados, pues es en estos

en los que el Estado mismo surge como patrón de generación de inseguridad para las personas. (Restrepo y Aponte, 2009).

Se ha de quedar bastante corto en relación al reconocimiento parcial de compromiso del mismo a nivel internacional en casos como lo son: las Masacres de Ituango, Comunidades Afro-descendientes, Las Palmeras, Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia), Masacre de Mapiripán, Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) y Masacre de Santo Domingo.

Entonces, en casos de tal trascendencia como los anteriormente mencionados. Los modelos microeconómicos presentan el conflicto armado interno colombiano como un juego entre agentes en competencia, que poseen información (completa o incompleta), analizan las actuaciones de sus contendores, calculan probabilidad de ganancia (cálculos basados en fuerzas en hombres y armas) e introducen el riesgo y la incertidumbre en sus decisiones; finalmente encuentra su punto de equilibrio (Valencia, 2006).

Por lo tanto, es más que acertado ratificar que el papel que la Corte se ha adjudicado es el de afirmar que solamente compete y tiene lugar el conflicto armado interno en el Estado en cuestión, precisando el rumbo que han tomado los hechos y el desarrollo de los mismos. Aun así, la Corte no se ha limitado y hace referencia a las raíces o comienzos y el posterior avance de tal conflicto interno en Colombia demostrándolo con pruebas desmantelando a los diversos figurantes nacionales y no nacionales de dichas disparidades.

Por su parte, en lo que concierne al sistema que se ha de aplicar en el conflicto interno armado colombiano podemos remitirnos a la determinación tomada por la Corte constitucional de Colombia en el fallo C-225 del 18 de mayo de 1995 el cual ha sido de bastante utilidad, en los casos colombianos acorde con decisiones presentadas aplicadas así:

[...] Los requisitos de aplicabilidad el artículo 1º son exigencias máximas que pueden ser renunciadas por los Estados, puesto que este tratado es un desarrollo y complemento del artículo 3º común a los Convenios de Ginebra de (1949), y éste fue concebido como "un mínimo humanitario aplicable a todo conflicto armado no internacional que superara por sus características e intensidad los simples disturbios y tensiones interiores". Puede entonces el Estado aplicar este instrumento internacional sin que se cumplan las exigencias máximas del artículo 1º, "cuando esté en su intención

aplicar los mínimos humanitarios contenidos en el artículo 3° común y desarrollados en el Protocolo II.". Corte Constitucional. (18 de mayo de 1995). Sentencia C-225/95. Referencia: expediente No. L.A.T.-040 [M.P. Alejandro Martínez Caballero].

4. Referencias y elementos de carácter estructural compilados en los grupos a quienes compete y que están incluidos en la verdad legítima.

Las experiencias de las comisiones de la verdad en América Latina o de grupos de esclarecimiento en Colombia, indican que esos informes pueden tener trascendentales repercusiones en la explicación de lo sucedido en graves períodos de violencia o de conflicto armado interno (Posso, 2016).

Entendiéndose que la experiencia de las comisiones de la verdad no se limita únicamente al contexto colombiano, se puede tomar referencia de países como: Canadá, Costa de Marfil, Ghana, Haití, Madagascar, Malí, Marruecos, República Democrática del Congo, Ruanda, Togo, Burundi, Túnez, Gabón; todo esto debido a múltiples factores que favorecen el uso de dicho recurso jurídico, como los son el hecho de que si bien es cierto resultan bastante efectivas, aclarando, que no necesariamente son una característica única y perteneciente a los Estados latinoamericanos.

Las referencias compiladas de Esclarecimiento Histórico son material probatorio relevante a la hora de determinar responsabilidades internacionales de cada Estado y de los hechos que en distintas ocasiones han entrado a ser dirigidos por su autoridad, determinando información de la CIDH del caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua donde:

[...] Los hechos del caso ocurrieron el 28 de octubre de 1990. Jean Paul Genie Lacayo, de 16 años de edad y residente en la ciudad de Managua, se dirigía en automóvil a su domicilio en el reparto Las Colinas. Cuando conducía en la carretera se encontró con una caravana de vehículos con efectivos militares quienes, al ver que los trataba de sobrepasar, le dispararon con sus armas. Luego de ello Jean Paul Genie Lacayo fue abandonado en la carretera y murió de shock hipovolémico a consecuencia de la hemorragia. Sus familiares presentaron una serie de recursos ante instancias administrativas, policiales, judiciales y militares, todos ellos dirigidos a investigar y

sancionar a los responsables de la muerte de Jean Paul Genie Lacayo. No obstante, existieron numerosos obstáculos en la investigación, y no se llegó a identificar y sancionar a los autores. (Corte IDH, Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares. Sentencia del 27 de enero de 1995 - Fondo, Reparaciones y Costas. 29 de enero de 1997 - Solicitud de Revisión de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. 13 de septiembre de 1997. Caso ante la Corte IDH Serie C No. 21, Serie C No. 30, Serie C No. 45).

Las experiencias de las comisiones suelen tener precedentes en el trabajo de grupos de derechos humanos que han recogido denuncias sobre violaciones en los periodos más difíciles de una dictadura o conflicto armado (Pacheco, 2005). Recientemente este ente de control en materia de Derechos Humanos ha consentido constreñir que determinar un contexto con fundamento en un informe de Comisión de Verdad no la excusa de evaluar de manera concatenada el conjunto demostrativo en relación directa a las leyes de experiencia y la razón de la mano con la sana crítica.

En todo caso, a los fines que aquí interesan, resulta importante señalar que las normas de derecho internacional humanitario también se aplican automáticamente en caso de conflicto armado no internacional y que en ellas tampoco rige el principio de reciprocidad (Pinto, 2003). De acuerdo a los informes de Comisiones de la Verdad se hará referencia a casos puntuales que permitirán evaluar el manejo de dichos reportes en aras de dejar sentadas bases para casos de similar estirpe en un futuro.

En el entendido de los puntos a resolver se conoce de primera mano que adicional al reconocimiento del compromiso por parte del Estado para ratificar en qué contexto se encuentra tal conflicto armado, la Corte normalmente opta por emitir un comunicado de los reportes a las comisiones de Verdad fundadas en el país que corresponda estableciéndolo como en una atmosfera de postconflicto armado.

El ideal es que a raíz de los mismos quede comprobado que hubo un conflicto armado interno que retó a grupos al margen de la ley o alzados en armas contra las fuerzas armadas que pertenecen al Estado, como se presentó en el caso Suárez Rosero Vs. Ecuador en donde los hechos del presente caso se iniciaron el 23 de junio de 1992 cuando Rafael Iván Suárez Rosero fue detenido por agentes de la Policía Nacional del Ecuador, en el

marco de la operación “Ciclón”, cuyo presunto objetivo era desarticular una organización del narcotráfico internacional. La detención se realizó sin una orden judicial y sin haber sido sorprendido en flagrante delito. El señor Suárez Rosero no contó con un abogado durante su primer interrogatorio. Asimismo, se le restringió las visitas familiares.

Se interpuso un recurso de hábeas corpus para cuestionar la detención. Sin embargo, éste fue rechazado. El 9 de septiembre de 1996 se dictó una sentencia condenatoria donde se resolvió que el señor Suárez Rosero era encubridor del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Fue sentenciado a dos años de prisión y una multa de dos mil salarios mínimos vitales generales. (Corte IDH, Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Sentencia Fondo. 12 de noviembre de 1997 Reparaciones y Costas. 20 de enero de 1999. Interpretación de la Sentencia de Reparaciones 29 de mayo de 1999. Caso ante la Corte IDH Serie C No. 35, Serie C No. 44, Serie C No. 51).

Por consiguiente, se podría decir que el recuento de lo que se vive en la actualidad colombiana, esencialmente lo que nos compete en relación a lo que tienen derecho las verdaderas víctimas, propone no solamente que existen aprietos que en su gran mayoría surgen porque parece no juzgar por completo ni de manera profunda a todos los individuos implicados desde diversas perspectivas en los gestos de terrorismo que se imputan a dichas organizaciones que se encuentran al margen de la ley. El caso Santo Domingo, es la expresión de una jurisdicción nacional e internacional, con vacíos e inconsistencias. Ya que existieron deficiencias desde la primera inspección judicial en la cual no se tomaron el tiempo realmente necesario para determinar cómo ocurrieron los hechos, no se manejó una responsable cadena de custodia (Doza, 2006).

Aquí rotula además el hecho que las normas contemporáneamente observan con detenimiento todas estas aristas. Dicho esto, vemos el ejemplo de la Ley 418 de 1997; Ley 975 de 2005 y la Ley 1424 de 2010, las cuales se complementan entre sí y trabajan en ocasiones de conflicto entrando a jugar un papel fundamental del cuerpo normativo del mismo. Como vemos se ha atribuido a las comisiones de la verdad la facultad de declarar oficialmente la “historia verdadera” según la cual el Estado y la sociedad se posicionarán

frente a un pasado traumático, de lo que se deduce que detrás de estas comisiones hay una pretensión de descubrir lo realmente sucedido. (Fuentes & Cote, 2004).

5. Los contextos de convencionalidad de los derechos humanos en el derecho internacional humanitario.

En materia de convencionalidad, que como lo mencionamos con anterioridad consiste en rasgos generales en la manera en como los diferentes entes se remiten a ejercer teniendo en cuenta todos los parámetros posibles concernientes incluso al Estado mismo a tratar. La creación de la doctrina del control de convencionalidad es uno de los más recientes esfuerzos llevados a cabo por las distintas organizaciones que protegen los Derechos Humanos para incrementar la efectiva aplicación de estándares mínimos en materia de derechos humanos del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos en los sistemas jurídicos nacionales de la región. (González, 2014).

Como también es importante aclarar que. Los órganos judiciales de cada país firmante de la CADH hoy tienen una doble tarea que realizar. Por un lado, ejercer el llamado Control de Constitucionalidad y por el otro un CCV. El primero consiste en realizar una comparación entre su Constitución y las normas que por su rango están por debajo de ella, debiendo darle prioridad a la primera. Mientras que el segundo, de acuerdo con Bazán (2011), consiste en juzgar en casos concretos si un acto o una normativa de derecho interno resultan incompatibles con la CADH, disponiendo en consecuencia la reforma o la abrogación de dichas prácticas o normas, según corresponda, en orden a la protección de los DD. HH., y la preservación de la vigencia suprema de tal convención y de otros instrumentos internacionales fundamentales en este campo. Martínez-Lazcano, A., Pérez, E., & Cubides, J. (2015, enero-junio).

Igualmente es de precisar que en este entendido. La Justicia transicional, siguiendo a Heidi Abuchaibe, se entiende como las medidas excepcionales y transitorias desarrolladas por los Estados para enfrentar graves violaciones de derechos humanos, originadas en el marco de un conflicto o un estado de excepción. Pese al esfuerzo por reconocer y

estandarizar internacionalmente la existencia de instrumentos para sociedades que han salido del conflicto, hay un consenso casi generalizado frente a la inexistencia de parámetros o medidas unificadas en la materia. Vivas y Cubides (2016).

Es necesario hacer especial énfasis en las siguientes normas pertenecientes a la Convención las cuales permiten fundamentar el uso del DIH en cualquier caso de Conflicto Armado: Artículo 27; Artículo 29; Artículo 64. Con respecto al Artículo 27, acerca de “Suspensión de Garantías” aun cuando no tiene referencias en todos y cada uno de los casos asociados al conflicto armado ya que presenta un pequeño pero significativo vacío legal, no está de más recalcarlo por su trascendencia como principio obligado que permite explicar muchas de las pautas del paso del DIH a la Corte, jurisprudencialmente hablando. Textualmente el mismo plantea:

[...] **Artículo 27. Suspensión de Garantías.** 1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social...”. (Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Pacto de San José. (Gaceta Oficial No. 9460 del 11 de febrero de 1978).

Siendo cierto que el Estado está en toda la obligación y el derecho de garantizar la seguridad y el mantenimiento del orden público. Si observamos con atención los alcances del “control difuso de convencionalidad”, podemos advertir que en realidad no es algo nuevo. Se trata de una especie de “bloque de constitucionalidad” derivado de una constitucionalización del derecho internacional, sea por las reformas que las propias Constituciones nacionales han venido realizando o a través de los avances de la jurisprudencia constitucional que la han aceptado. (Ferrer, 2010).

Es importante resaltar que su poderío no es ilimitado ya que este debe actuar siempre en materia de aplicación de procedimientos que sean conformes y respetuosos del derecho de cada individuo bajo su jurisdicción.

En general, el Artículo 27 de la Convención permite que la norma se aplique conforme a los requerimientos de las distintas situaciones a tratar. Es así como esto demanda que tal indulto se interprete y así mismo posteriormente se ejecute, de manera conjunta con lo establecido en los Artículos siguientes que nos competen con restricciones o excepciones. Por su parte, el Artículo 29 explica:

[...] **Artículo 29. Normas de Interpretación.** Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza”. Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Pacto de San José. (1978). Gaceta Oficial No. 9460 del 11 de febrero de 1978.

Y por su parte el Artículo 64:

[...] 1. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Asimismo, podrán consultarla, en lo que les compete, los órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires. 2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales”. Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Pacto de San José. (1978). Gaceta Oficial No. 9460 del 11 de febrero de 1978.

Conforme al Artículo 29 y el Artículo 64 dictados por este órgano (el ultimo regulando la capacidad de consulta de la Corte), se ha determinado que la Convención logra ser descifrada en proporción y dependencia de otros mecanismos de carácter internacional.

La Corte misma ha declarado que al momento de que un Estado hace parte de la Convención y ha aceptado su idoneidad en aras del proceso, ella está en todo el derecho de evaluar la concurrencia de la gestión del Estado en cuestión o, en su defecto. Ninguno de

los otros nuevos derechos ha sido reconocido mediante un instrumento convencional de alcance universal, es decir, mediante un tratado internacional vinculante para los Estados que lo ratifiquen. (Gómez, F y Pureza, 2004).

La compatibilidad de alguna norma interna con los derechos y deberes comprendidos en la Convención, claramente explicada en conjunto con aristas de otros convenios. A raíz de esto la Corte ha hablado de un paralelismo existente entre estos contenidos comunes y entre las prácticas de este ente regulador (la Convención) e incluso de otras tantas herramientas internacionales en materia de Derechos Humanos ineludibles y sobre los cuales la norma jurídica no pierde su efecto.

La claridad mencionada sirve como punto de partida para que sea posible recalcar por parte de la Corte la diferencia de los conceptos de "interpretación" y "aplicación", aunque no sea del todo oportuno aplicar el DIH para dar eficaz solución a todos sus asuntos, por ejemplo, en el caso 19 comerciantes Vs. Colombia:

[...] Los hechos del presente caso ocurrieron el 7 de octubre de 1987 cuando miembros de un grupo paramilitar que operaba en el Municipio de Puerto Boyacá detuvieron a 17 comerciantes, presuntamente por sus relaciones con grupos guerrilleros. Los comerciantes se dedicaban a actividades comerciales, tales como transporte de mercaderías o de personas, o compra y venta de mercancías en la frontera colombo-venezolana. Luego de su detención, fueron asesinados y descuartizados por lo que lanzaron sus cuerpos a un río. Dos semanas después de ocurridos los hechos, otros dos comerciantes fueron en búsqueda de los desaparecidos. Igualmente fueron detenidos y asesinados por el grupo paramilitar. Ante la desaparición de los 19 comerciantes, sus familiares interpusieron una serie de recursos legales a fin de localizarlos. No obstante, no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionó a los responsables de los hechos. (CIDH, Caso 19 comerciantes Vs. Colombia. Sentencia - Excepción preliminar. 12 de junio de 2002 - Fondo, Reparaciones y Costas. 5 de julio de 2004. Caso ante la CIDH Serie C No. 93 Serie C No.109).

La Corte Interamericana se ha pronunciado diciendo que aun cuando escasea de las competencias para definir si un Estado es responsable y en qué grado por la violación de pactos de calibre internacional, es capaz de deducir que determinadas desatenciones o sucesos que acorde con los tratados vulneran los derechos humanos transgreden además otros mecanismos e instrumentos de protección de la persona a nivel internacional.

6. Las referencias determinadas por la Corte Interamericana de derechos humanos en el empleo de la jurisprudencia al derecho internacional humanitario.

Con fundamento en los detalles e informes que se plantean con base a lo ocurrido, es de notar que, en el reenvío manifiesto a las reglas del Derecho Internacional Humanitario, las cuales hacen parte del *ius cogens*, es decir de un derecho obligatorio internacional independientemente que el Estado adopte o no las Convenciones de Ginebra y sus protocolos adicionales.

Por un lado, reconocimos un acercamiento estable que permite fortalecer lo comprendido en los Derechos Humanos y las trascendencias de los mismos en cuanto a los compromisos del Estado registrados ante la Convención, siendo estas analizadas bajo la lupa del DIH. En cuanto a la morfología actual de la guerra, los ataques son descritos como químicos, biológicos, nucleares limitados, terroristas o informáticos y están dirigidos a puntos débiles de un enemigo superior (Schamis, 1979).

Adicionalmente, una mirada cercana que pretende visualizar más allá de una estricta elucidación de dicha Convención respecto al DIH, que es mostrada a lo largo del manejo y la manifestación de una transgresión de los elementos primordiales del DIH en el estudio de los hechos, y a través de los ordenamientos en calidad de reparación encaminadas a que se implemente el Derecho Internacional Humanitario.

Para remitirnos a un caso más concreto, en *La Masacre de Santo Domingo vs. Colombia*, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la mano con los representantes de las víctimas plantearon, en atención a su experticia, que el abogado Alejandro Valencia Villa (de origen colombiano) abordara tópicos puntuales del Derecho Internacional y, a modo colateral, acerca de la tendencia y correlación del mismo con el DIDH. Es así como a la hora de la resolución del edicto a la audiencia de carácter público, el entonces presidente de la CIDH, consideró que la esencia del concepto del experto se

extiende a lo específicamente buscado por las partes de este proceso definitivo de forma tal que forja un interés distinguido al orden público, a nivel interamericano.

Es aquí cuando la Corte evaluó por vez primera la competencia del Estado cuando se comete alguna violación al derecho a la integridad personal o incluso a la vida misma, descifrando la Convención a la luz de las pautas dadas por el DIH, como lo son el principio de precaución, el principio de proporcionalidad y el de distinción.

A pesar del punto de vista impuesto por la CIDH a partir del año 2000, los Estados continúan contraponiendo particularidades de entrada que debaten la capacidad de la misma para despacharse al Derecho Internacional Humanitario. En cuanto a los comedimientos para responder a tales Estados, la Corte Interamericana ha agregado informes adicionales y extra convencionales que ajustan el alegato de la interpretación de la misma a la lupa de una rama del derecho que es foránea al interamericano, viéndolo reflejado en su orden en el caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala desarrollado por la CIDH:

[...] Los hechos del presente caso se refieren a la aldea Plan de Sánchez se localiza en el Municipio de Rabinal, en la región central de Guatemala. La zona está habitada predominantemente por miembros del pueblo indígena maya, pertenecientes a la comunidad lingüística Achi. Desde 1982, el ejército de Guatemala mantuvo una fuerte presencia en la zona. El día domingo 18 de julio de 1982, se desarrollaba el día de mercado en Rabinal. Aproximadamente a las ocho de la mañana, fueron lanzadas dos granadas de mortero en Plan de Sánchez. Posteriormente, llegó a la comunidad un comando del ejército de aproximadamente sesenta personas. Al llegar el comando, éste separó a las niñas y mujeres jóvenes de las mujeres mayores, los hombres y los niños. El primer grupo fue objeto de maltratos, violaciones y asesinatos. Los niños y restantes niñas fueron apartados y asesinados a golpes. Otras personas rendidas fueron obligadas a concentrarse en otra casa, la cual, fue objeto de disparos de armas de fuego de manera indiscriminada y de ataques con granadas de mano. Alrededor de 268 personas fueron ejecutadas en la masacre, quienes eran en su mayoría del pueblo maya de Achi y algunas eran no indígenas residentes en algunas comunidades aledañas. No se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables. (CIDH, Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Sentencia Fondo. 29 de abril de 2004 Reparaciones. 19 de noviembre de 2004. Caso ante la Corte IDH Serie C No. 105 Serie C No. 116).

De lo mencionado, es evidente que en aquellos casos en los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referenciado de manera rotunda y explícita al DIH, la

subsistencia de un conflicto armado interno, como supuesto fundamental para la conmutación a ese ente regulador, no se ha determinado concisamente por la CIDH. Para determinar que está comprobado tal contexto, la Corte Interamericana se ha fundamentado en algunos parámetros como los son: la declaración de la responsabilidad y compromiso internacional del Estado en cuestión, como se interpreta el silencio u omisión del mismo y las referencias compiladas de Esclarecimiento Histórico.

Dichas fuentes han dado paso a que la CIDH reconozca la administración por parte del Derecho Internacional Humanitario aplicado al estudio del conflicto interno armado atañido y que, de esa manera, haga una retroalimentación indistinta en sus circunspecciones.

Ha quedado totalmente al descubierto que la Corte ha unificado las competencias usuales de cada Estado que hacen parte de la Convención como derivación de lo que se interpretó a la luz del Derecho Internacional Humanitario, de los derechos englobados en aquella.

7. La implementación acerca de los principios internacionales del derecho internacional humanitario.

Ya establecidos los principios internacionales del DIH; como preceptos a nivel universal y determinados en cumplimiento de carácter obligatorio por los Estados vinculantes universales, los cuales admiten su reconocimiento como órgano de jurisdicción en competencia internacional CIDH, en manifiesto a normatividad implícita en los Convenios de Ginebra de 1949, como también al marco de sus Protocolos Adicionales de 1977.

El derecho de Gentes está hoy en día conformado por las reglas y principios contenidos en los tratados y convenios internacionales que hayan venido regulando las operaciones de la guerra para humanizarla y también define el trato debido a las personas que no participan en las hostilidades. (Valencia, 1989). Los cuales establecen, circunscriben, instruyen y guían; e introduciendo la conducta del proceso y procedimientos

en asistencia a acontecimientos demostrados en un conflicto interno armado; por ende, interpretar y aplicar la normatividad vigente, cumpliéndola a cabalidad con un único fin de garantizar por medio de estas una seguridad jurídica para todos de carácter general.

Para referencia se puede indicar la presentada en fallos sentados en firme como lo es el caso la Masacre de Santo Domingo vs Colombia; donde se soportó la sentencia, en filo al marco legal de forma usual en el desarrollo de las operaciones militares, por lo que la CIDH, dispuso de estos los principios fundamentales, implementándolos en el escenario de acuerdo a las normas convencionales al DIH;

En el Caso que nos ocupa es de anotar que se aplicaron los principios de: Distinción, Proporcionalidad y Precaución; precisando que de igual forma abordaremos inicialmente puntualmente los principios de Limitación; Necesidad Militar; Humanidad; y de Protección al Medio Ambiente; cuyo objetivo será trazar una línea de conocimiento de cada uno.

Aclarando por lo anterior, que estos principios tienen como esencia encaminar al razonamiento a decisiones falladas por la CIDH, en integración al DIH; más su fin no es suplir la normatividad establecida y convenida para aplicar en esos particulares.

7.1 Principio de Limitación.

En razón a este principio¹³ podemos destacar que insta para que el uso de artefactos de defensa (armas) y sus sistemas o inventivas empleadas (técnicas); con el fin que estén condicionadas de manera específica y así poderlas utilizaren el espacio de un conflicto; denotando la restricción totalmente para las de destrucción masiva (ADM). En las cuales

¹³ “En efecto, el Protocolo Adicional I de acuerdo a las Naciones Unidas, Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra de (1949) relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional recoge este principio en el artículo 35 en los siguientes términos: En todo conflicto armado, el derecho de las Partes en conflicto a elegir los métodos o medios de hacer la guerra no es ilimitado. Queda prohibido el empleo de armas, proyectiles, materias y métodos de hacer la guerra de tal índole que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios. En igual sentido la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre la Legalidad o el Empleo de Armas Nucleares indicó que los Estados no poseen un derecho ilimitado a escoger los medios ni los métodos de combate dentro de un conflicto armado, sino que aquellos se encuentran vinculados a razones humanitarias que efectivamente los limitan. ”. (López. P. 2009. p.231).

podemos encontrar; Bombas Nucleares Biológicas, Químicas, Termobárica; como también el manejo de sensores fusionados; Misil Balístico Intercontinental, y la Munición de Uranio empobrecido. De los anteriores puestos en práctica por algunos gobiernos, dejando funestos resultados para la humanidad; como alusión la:

[...] Manifestación de este principio es la prohibición expresa de la utilización de aquellas armas que causen daño excesivo o sufrimiento innecesario. Sirva como ejemplo el Protocolo de 1925 sobre la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos, la Convención relativa a la prohibición del desarrollo, producción y almacenamiento de armas bacteriológicas tóxicas y su destrucción del 10 de abril de 1972, la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados del 10 de octubre de 1980, el Protocolo II sobre prohibiciones o restricciones al empleo de minas, armas trampa y otros artefactos del 10 de octubre de 1980, el Protocolo III sobre Prohibiciones o Restricciones del empleo de Armas Incendiarias del 10 de octubre de 1980, el Protocolo IV sobre Armas Láser Cegadoras del 13 de octubre de 1955 y la convención sobre la prohibición del desarrollo de la producción, almacenamiento y empleo de armas químicas y sobre su destrucción del 13 de enero de 1993. Especial mención merecen los tratados sobre limitación del armamento nuclear, tales como el tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares de 1968, el tratado que prohíbe las pruebas nucleares en la atmósfera, espacio ultraterrestre y bajo el agua de 1965, el tratado sobre la prohibición de emplear armas de destrucción en masa en los fondos marinos y su subsuelo de 1971, el tratado para la proscripción de las armas en América Latina de 1967, el tratado sobre el establecimiento de una zona desnuclearizada en el Pacífico Sur de 1985, el tratado sobre la eliminación de misiles nucleares de alcance intermedio y corto de 1987 y el tratado sobre la reducción y limitación de las armas estratégicas ofensivas de 1992. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Principios Fundamentales Del Derecho Internacional Humanitario. San José, de Costa Rica. 2009).

Es importante aclarar que, este principio invita a realizar un conflicto Interno Armado con una presentación determinada en la favorabilidad de la guerra, por lo que el uso de las armas se presenta en cuanto una equidad para lograr los fines de cada contendor; por lo cual, no se aceptan la utilización de armas que causen una destrucción a gran escala, donde ninguno de los participantes podrá enfrentarse con esta clase de artefactos, los cuales causarían una catástrofe, a lo cual, es el objetivo que pretende evitar este principio.

7.2 Principio de Necesidad Militar.

El propósito de este principio en un conflicto armado, en tal sentido; señala que el único objetivo legítimo que los Estados deben proponerse durante la guerra es la debilitación de las fuerzas militares del enemigo, y de tal modo lograr el objetivo¹⁴ desarrollándolo con una pequeña inversión, operado por un grupo selecto de talento humano, que presente excelentes resultados a la tarea encomendada, sobre lo que se dilucida que:

[...] Este principio fue formulado en el Preámbulo de la Declaración de San Petersburgo de 1868 junto al principio de distinción y necesidad militar. En igual sentido destaca el artículo 23 del Anexo IV al Convenio de La Haya del 18 de octubre de 1907 relativo a las Leyes y Costumbres de Guerra Terrestre, pues en su letra g) prohíbe destruir o tomar propiedades enemigas a menos que tales destrucciones o expropiaciones sean exigidas imperiosamente por las necesidades de la guerra. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos de (2002). refiriéndose a este principio ha indicado que el principio de necesidad militar justifica aquellas medidas de violencia militar que no están proscritas por el Derecho Internacional, que son necesarias y proporcionadas para garantizar el rápido sometimiento del enemigo con el menor costo posible de vidas humanas y recursos económicos. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Principios Fundamentales Del Derecho Internacional Humanitario. San José, de Costa Rica. (2009).

7.3 Principio de Humanidad.

¹⁴Cabe destacar en esta materia la Resolución de la Asamblea General de la OEA 2261 de 2007 sobre el Apoyo a la Acción contra las Minas Antipersonal en Ecuador y Perú del 5 de junio de 2007, oportunidad en que señaló que la presencia de minas terrestres en zonas fronterizas entre los dos Estados y de instalaciones de transmisión eléctrica en Perú constituye una grave amenaza para las poblaciones civiles y un factor que impide el desarrollo económico en las zonas rurales y urbanas y que su eliminación constituye una obligación y condición necesaria⁷. Una manifestación concreta de este principio se advierte en el artículo 8.1.1 del Manual para Comandantes de la Armada de los Estados Unidos sobre Derecho aplicable a las Operaciones Navales que dispone que la necesidad militar permite al beligerante aplicar la fuerza para alcanzar los objetivos militares legítimos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar o cuya destrucción, parcial o total, captura o neutralización, ofrezca en las circunstancias del caso una ventaja militar definida. (López. P. 2009. p. 232, 233).

Al hacer honor al humanismo¹⁵, del cual no es otra cosa que cualquier ser humano tiene que ser reconocido como tal debido a que en ese momento no hace parte de la contienda, entendido esto que no hay distinción cual fuere su naturaleza, derecho de género, estirpe, grupo de descendencia, diversidad de culto, clase social, origen público-privado o cualquier diversidad que en ellos desafortunadamente muestra la desigualdad; en el entendido que desistió o en su defecto no ha formado parte activa en las pugnas de un conflicto armado, expresando que:

[...] Este principio está consagrado en diversas disposiciones de los Convenios de Ginebra. Sirva como ejemplo, al Convenio de Ginebra III relativo al Trato Debido de Prisioneros de Guerra, particularmente, el artículo 13 que se refiere al trato humano a los prisioneros de guerra, el artículo 14 relativo al respeto de los prisioneros de guerra, el artículo 17 inciso 3 sobre el interrogatorio del prisionero de guerra y el artículo 87 que trata sobre el castigo de los prisioneros de guerra”. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Principios Fundamentales Del Derecho Internacional Humanitario. San José, de Costa Rica. (2009).

El humanismo es el primer principio que se debería aplicar en todo campo, y aún más en lo relacionado con la presentación de los conflictos internos armados, la aplicabilidad de este se basa en el respeto por el otro, el excelente trato en el evento de ser vencido en el campo de batalla, teniendo en cuenta que, no solo estamos hablando de un ser humano con representación del estado como lo son el personal civil, sino; de un miembro que hace parte de un grupo que representa la soberanía de una nación.

7.4 Principio de Protección al Medio Ambiente.

¹⁵Constituye un pilar fundamental del Derecho Internacional Humanitario y establece la necesaria coordinación y conexión con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el marco de la Protección de la Persona Humana. Fue formulado en el siglo XVIII primeramente por Jean-Jaques Rosseau, quien, refiriéndose a la guerra entre Estados indicó que la guerra no es ni puede ser una relación de hombre a hombre, sino de un Estado con otro Estado, en la que los particulares sólo son enemigos accidentalmente, no como hombres, ni como ciudadanos, sino como soldados (...) Siendo el objeto de la guerra la destrucción del Estado enemigo, hay derecho para matar a sus defensores en tanto que tienen las armas en las manos pero luego que las dejan y se rinden, no son enemigos ni instrumentos del enemigo, y como vuelven a entrar en la simple clase de hombres, ya no se tiene derecho a la vida. (López. P. 2009. p.233).

En atención a nivel mundial por la falta de conciencia y respeto por nuestro planeta, la aplicación de este principio en todo conflicto armado refrenda la legítima defensa expuesta por muchos países como compromiso a preservarla para generaciones futuras; no obstante imposibilitando este campo de manera general, donde lo determinan a modo de escenario muchos adversarios para llevar a cabo sus enfrentamientos¹⁶, en términos generales:

[...] En igual sentido destaca el artículo 35.3 del Protocolo Adicional I que prescribe que queda prohibido el empleo de métodos o medios de hacer la guerra que hayan sido concebidos para causar, o de los que quepa prever que causen daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Principios Fundamentales Del Derecho Internacional Humanitario. San José, de Costa Rica. (2009).

Desarrollaremos los principios fundamentales del derecho internacional humanitario, de: Distinción, Proporcionalidad y Precaución; usados en el “Caso la Masacre de Santo Domingo vs Colombia”; por la CIDH donde resolveremos él; como en el alcance de sus decisiones, este órgano jurisdiccional de carácter internacional dio su aplicabilidad en los actores mencionados como parte del conflicto.

Escenario en el cual se presentan la declaración de vulneración comprobada atinentes al DIH. Integrando el DIDH., en la cual la CIDH Valoró el concepto determinado por el experto de la materia, en el entendido que es un componente importante que pertenece de manera notable; Lugar donde se marca el nacimiento como intervención de la CIDH Responsabilizando los Estados por la falta de protección a los Derechos de la vida e integridad personal medidas de protección para las niñas y niños, como se ha presentado a lo largo del presente documento al orden de la aplicabilidad de los principios básicos internacionales del Derecho Internacional Humanitario, referentes al DIH.

Es de suma importancia llegar a un consenso e invitar no causar daño por parte de los integrantes del conflicto, tomando conciencia y razón en el mayor espacio que tenemos

¹⁶ Ha sido formulado entre otros autores por Friz Kalshoven y Lizbeth Zegveld y recogido por Elizabeth Salmón en su libro Introducción al Derecho Internacional Humanitario del año 2004 y ha cobrado especial interés a partir de la guerra de Vietnam, dado que las características de su entorno permitieron la deforestación a gran escala como método de combate. (López P.2009. p.237).

como seres humanos como lo es el sistema de gestión ambiental, ello, haciendo referencia tanto a la flora como a la fauna, es totalmente desgarrador observar los vestigios al término de la guerra, donde acabamos colateralmente con nuestra tierra y los seres sintientes que nos acompañan en este paso tan efímero. El entrar en razón por conseguir un mejor futuro para nuestras generaciones nos debería preocupar y así, motivar a cada instante, para mantener un desarrollo sostenible.

7.5 Principio Distinción.

El uso de este principio por parte del órgano competente internacional se determinó de acuerdo a los combates desplegados entre la fuerza pública representada por la Fuerza Aérea Colombiana y el grupo armado denominado FARC¹⁷, todo ello dispuesto en la normatividad vigente aplicados a la situación evidenciada donde participaron los actores del conflicto nombrados como población civil y contendientes de la guerra; hechos acaecidos en el caserío de Santo Domingo, donde se establece la inobservancia del Estado, debido a su ejecución en la operación militar aérea desarrollado, teniendo en cuenta que los reglamentos prohíben taxativamente las ofensivas de manera imperceptible.

Utilizando medios y técnicas de asalto ilimitados, yendo en contravía de lo que generalmente se encuentra consignado en el DIH, donde favorablemente para encontrar la verdad del caso estudiado se verificó por parte de la CIDH que quienes piloteaban las

¹⁷ Vale recordar que la cruzada antiterrorista global iniciada por Estados Unidos luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra ese país, fue una coyuntura externa que sirvió a los intereses del gobierno colombiano en su catalogación de “terroristas” a los grupos armados ilegales, máxime cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) estaban ya catalogadas como tales por el Departamento de Estado de Estados Unidos y luego lo fueron por parte de la Unión Europea. El Protocolo II de Ginebra (1982), como parte del Derecho Internacional Humanitario, plantea de manera indirecta la definición de conflictos armados cuando afirma que dicha normatividad reguladora de la guerra es aplicada precisamente en conflictos armados “que se desarrollen en territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo”. (Betancur B., Gonzalo J. 2010 p.73).

aeronaves puestas en desarrollo del combate y accionaron el armamento asignado para la operación, denotando la imprevisión manifiesta a proteger los Derechos allí vulnerados a la población civil que se trasladaban por las sendas que hacen parte de la calle principal de ese lugar; como referencia y:

[...] 212. De acuerdo a lo establecido por el Derecho Internacional Humanitario, el principio de distinción se refiere a una norma consuetudinaria para conflictos armados internacionales y no internacionales en la cual se establece que “las partes en conflicto deberán distinguir en todo momento entre personas civiles y combatientes”, que “los ataques sólo podrán dirigirse contra combatientes” y que “los civiles no deben ser atacados”. Además, son normas de Naciones Unidas, Derecho internacional humanitario consuetudinario, Principios rectores de los desplazados internos. Las que disponen que “las partes en conflicto deberán hacer en todo momento la distinción entre bienes de carácter civil y objetivos militares”, de tal forma que “los ataques sólo podrán dirigirse contra objetivos militares”, mientras que “los bienes de carácter civil no deben ser atacados”. Del mismo modo, el párrafo 2 del artículo 13 del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra prohíbe que tanto las personas civiles como la población civil como tal sean objeto de ataques. (...)”. Caso La Masacre de Santo Domingo vs Colombia. Corte Interamericana de Derechos Humanos. San José, de Costa Rica. (2017).

7.6 Principio Proporcionalidad.

La aplicación de este precepto para el caso que se está desarrollando administrado por el órgano colegiado competente, hace referencia al propósito integral que tenía la institución de la fuerza pública con la realización de la operación era el grupo al margen de la Ley FARC, factiblemente situado estratégicamente a los alrededores en medio de los matorrales que hacen parte del caserío; aclarando que no es de incumbencia observar el estudio profundo la acción presentada como lo fue la propulsión del elemento cluster en atención a este principio, ya que al examinarlo complicaría su análisis de acuerdo a que se debería razonar si el ataque fue una consecuencia desproporcionada lo cual conlleva a establecer una justificación del sí tanto las víctimas fatales como las personas lesas.

En proporción con la ventaja militar específica, como resultado de alcanzar el objetivo militar trazado, situación no presentada en el caso tratado; así las cosas el fundamento de este precepto aplicado sucedió oportunamente ya que había ocurrido

violando el principio de distinción, demostrado en la acción desplegada por la incursión armada que desafortunadamente perjudicó sus habitantes en forma definitiva, como también si en el evento se pudo presentar un supuesto hecho confuso debido a que se encontraban agrupados una de las partes combatientes¹⁸ y la población civil, lo que no argumenta en ningún escenario el acontecimiento cuyo resultado es conocido por la opinión en general, presentado así:

- [...] 214. De acuerdo a lo establecido por el Derecho Internacional Humanitario, el principio de proporcionalidad se refiere a una norma consuetudinaria¹⁹ para conflictos armados internacionales y no internacionales, en la cual se establece que “queda prohibido lanzar un ataque cuando sea de prever que cause incidentalmente muertos y heridos entre la población civil, daños a bienes de carácter civil o ambas cosas, que sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista”. El referido principio establece entonces una limitante a la finalidad de la guerra que prescribe que el uso de la fuerza no debe ser desproporcionado, limitándolo a lo indispensable para conseguir la ventaja militar perseguida. [...]
- [...] 215. El Tribunal considera que no corresponde analizar el lanzamiento de dicho dispositivo a la luz del principio de proporcionalidad, puesto que un análisis semejante implicaría determinar si los muertos y heridos entre la población civil pueden ser considerado un resultado “excesivo” en relación con la ventaja militar concreta y directa esperada en caso de haberse impactado un objetivo militar, lo cual no ocurrió en las circunstancias del caso. Corte Interamericana de Derechos Humanos. San José, de Costa Rica. Caso La Masacre de Santo Domingo vs Colombia. (2017).

7.7 Principio Precaución.

¹⁸ Aunque sea obvio que la limitación o la prohibición de ciertas maneras de combatir, así como el uso de ciertas armas son de una importancia evidente para la protección de los combatientes" se suele considerar el "Derecho de La Haya" como sinónimo del "derecho de la guerra" sensu stricto y el "Derecho de Ginebra" como el "Derecho Humanitario" sensu stricto. (Swinarski. C, 1990 p.24).

¹⁹ El derecho de la guerra nació de los enfrentamientos entre fuerzas armadas en el campo de batalla. Hasta mediados del siglo XIX, la naturaleza de esas normas fue consuetudinaria y se reconocían porque habían existido desde tiempos inmemoriales y porque respondían a las exigencias de civilización. Todas las civilizaciones han establecido normas para minimizar la violencia, incluso la forma institucionalizada de violencia que llamamos guerra, puesto que limitar la violencia es la esencia misma de la civilización. Al hacer del derecho internacional un asunto sobre el que los soberanos debían ponerse de acuerdo y basándolo en la práctica y el consentimiento del Estado, Grocio y otros padres fundadores del derecho internacional público allanaron el camino para que ese derecho adquiriese dimensiones universales, aplicables tanto en tiempo de paz como de guerra y fuese capaz de trascender culturas y civilizaciones. Sin embargo, el auténtico pionero del derecho internacional humanitario contemporáneo fue Henry Dunant, aquel verdadero visionario del siglo XIX. (HENCKAERTS. J. M. – BECK. L.D. 2007. P.XI).

Para indicar el uso de este principio como apoyo en razón seguida al caso concreto, la CIDH tomo en referencia la información detallada de los elementos materiales probatorios y evidencia física; donde consideró lo ocurrido en el escenario de manera inversa para la aplicabilidad de este precepto, en el entendido que el uso del elemento cluster está catalogado como un arma con condición de exactitud donde el Estado es responsable, revelando que la experticia al efectuar la propulsión no fue la indicada, puesto que la normatividad y las instrucciones entregadas por el sistema testificando cuál era el procedimiento a seguir en esos casos de acuerdo a tiempo, modo, lugar donde se presenciaron los hechos denunciados, no surtió efecto el debido cuidado tiempo antes de expulsar el dispositivo teniendo en cuenta que ya se tenía experiencia debido a que se han incurrido en fallas con artefactos más exactos al momento de efectuar las operaciones ordenadas por el mando institucional.

Por lo que se puso en duda la utilización del armamento con el que se efectuó el combate ese fatídico 13 de diciembre de 1998 incluyendo el no seguir el protocolo en la operación militar, donde se estableció detalladamente que exclusivamente se hace uso de las ametralladoras cuando se arremeta como reacción a la acción de un ataque sedicioso o revolucionario evidentemente comprobado; precisando que en la documentación aportada al caso no advertía que quienes desde el aire operaban los medios tenían conocimiento si al momento de realizar el ataque existía una relación de prever la seguridad de la presencia de población civil, determinando que de todas maneras estos no deben correr nunca ninguna clase de riesgo.

[...] 216. De acuerdo a lo establecido por el Derecho Internacional Humanitario, el principio de precaución se refiere a una norma consuetudinaria [...]

- [...] 217. El dispositivo AN-M1A2²⁰, desarrollado en la década de 1940 es un arma imprecisa con un mecanismo de lanzamiento operado manualmente [...]
- [...] 218. No existe certeza de que el técnico encargado del lanzamiento del dispositivo tuviera contacto visual con el caserío antes de activar el dispositivo que liberó la cluster, e incluso, las evidencias permiten presumir lo contrario [...]
- [...] 221. La utilización de armamento explosivo arrojado desde una aeronave constituye una actividad que se cataloga necesariamente como peligrosa, y que por tal razón debe desarrollarse bajo estrictas condiciones de seguridad que garanticen que solamente se causará daño al objetivo seleccionado. [...]
- [...] 222. De acuerdo a la prueba presentada, podría considerarse que el objetivo designado para lanzar el dispositivo cluster no fue el lugar donde terminó cayendo efectivamente. [...]
- [...] 223. Lo anterior permite a la Corte concluir que la instrucción de lanzamiento fue imprecisa [...]
- [...] 227. La Corte constata que: i) el dispositivo AN-M1A2 utilizado es un arma con precisión limitada; ii) la instrucción del lanzamiento del dispositivo tampoco fue precisa, al haberse designado un área de lanzamiento que podía referirse a un objetivo que no queda claro si estaba definido, pues podía ir desde los 70 metros de distancia de Santo Domingo hasta 500 metros más al norte; iii) existían manuales y reglamentos vigentes para la época de los hechos que indicaban que el tipo de arma como la que fue utilizada no podía ser utilizada en zonas pobladas o cerca de caseríos con población civil; iv) las circunstancias que rodearon los hechos demuestran que ya se habían cometido errores con armas más precisas que el dispositivo cluster unos minutos antes de las 10:02 de la mañana; v) está en duda la necesidad de utilizar ese tipo de arma en los enfrentamientos que tuvieron lugar el día 13 de diciembre de 1998, y vi) unos segundos antes del lanzamiento, uno de los pilotos del Skymaster sugirió la necesidad de poner orden con las aeronaves, denotando un desorden de las operaciones aéreas para ese momento preciso. [...]
- [...] 229. En cualquier caso, dada la capacidad letal y la precisión limitada del dispositivo utilizado, el lanzamiento del mismo en el casco urbano del caserío de Santo Domingo o cerca de ahí, es contrario al principio de precaución [...]

²⁰ Bombas de Racimo (Cluster Bombs) Durante la década de los 90 la Fuerza Aérea Colombiana adquirió de Chile un lote de bombas modelo CB-250K (cada una lleva 240 submuniciones), y de Israel un lote de bombas ARC-32 (cada una con 32 submuniciones). En el año 2006 se utilizaron por primera vez para destruir pistas del narcotráfico en lugares recónditos de la geografía colombiana. Además de la “Operación Fénix” hay otro suceso histórico de interés que involucra a la Fuerza Aérea Colombiana, que tornó en escándalo. Se trata de la llamada “Masacre de Santo Domingo”. El 13 de diciembre de 1998, un helicóptero de la FAC lanzó unas bombas de racimo de un modelo antiguo (adaptador AN-M1A2 con seis bombas AN-M41A de 20 libras) sobre un blanco que se presumía legítimo en el área general de Santo Domingo, departamento de Arauca, pero luego el asunto degeneró en una crisis institucional al denunciarse que los afectados por el ataque habían sido civiles. (Hernández. D. 2017. P. 83,84).

[...] 230. Por todo lo expresado, este Tribunal determina que el Estado es responsable por la violación del derecho a la vida, reconocido en el artículo 4.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las personas fallecidas en el caserío de Santo Domingo (...), así como del artículo 5.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las personas que resultaron heridas (...). Corte Interamericana de Derechos Humanos. San José, de Costa Rica.. Caso La Masacre de Santo Domingo vs Colombia. (2017).

La situación de la que se tiene conocimiento, en el caso que nos atañe, puede hacer referencia a la falta de exactitud y un preciso ejercicio al momento de realizar la operación, tener precaución al momento de enfrentar una situación como la presentada en el Caso de la Masacre de Santo Domingo vs Colombia. El riesgo que se tiene en estos eventos es muy alto, por lo cual es de carácter especial, el manejo que hace el Estado; no entrega la máxima seguridad, no obstante que; en este tipo de temas siempre se corre un riesgo, el cual únicamente debe asumir la Nación.

8. Conclusiones.

Ya desarrollado el interrogante expuesto en este escrito donde se razona la presentación extensa en la generalidad de un sinnúmero de prácticas mostradas en los Convenios de Ginebra, puesto en relación, a todos los Estados parte quienes aceptaron en forma directa la aplicación de la reglamentación en apoyo de los principios internacionales del Derecho Internacional Humanitario, con el fin de obtener un resultado en la decisión acorde a la verdad, demostrado en la síntesis de la CIDH determinado de acuerdo a aplicabilidad del DIH; ello expuesto, en las fuentes que reconocen por medio de este órgano jurisdiccional competente la presencia del conflicto armado señalado en su concordancia con el DIH; aunado a ello, la afirmación y falta de responsabilidad sustentada en la incompetencia del Estado indicado en los injustificados casos guardando aún como siempre es su modo de operar ante sus administrados.

En lo dispuesto a los principios utilizados en cada caso específico, se denota en la regulación al uso de todas las armas en las disputas presentadas en el conflicto armado, lo

cual trace un límite en el mismo, con el objetivo general de dar un correcto fallo, empleando las herramientas necesarias de acuerdo a su legislación logrando obtener la protección a cada uno de los involucrados en sus encuentros hostiles; aclarando que al no surtir efecto el derecho interno esta la presencia de las normas del Derecho Internacional.

Esta corporación de carácter regional (CIDH), se ha transformado de manera positiva para sus decisiones con la utilización de los principios básicos como componente transversal el cual intervienen el DIH, el cual se debe implementar tanto previamente como en el momento y posteriormente que se esté ante un conflicto armado interno; así tanto previamente, en el momento y posteriormente en la presencia de un conflicto armado interno, para emitir si hay transgresiones a los Derechos Humanos; tomando las medidas pertinentes; participando los actores reconocidos intervinientes para dar una solución oportuna.

En el presente escrito es de aclarar que se entregó información específica sobre el caso La Masacre de Santo Domingo vs Colombia; dando solución como en el alcance de sus decisiones este órgano colegiado dio su aplicabilidad de acuerdo a su reglamento, utilizando como base los principios fundamentales del DIH, de Distinción, Proporcionalidad y Precaución; en el cual se demostró una vez más una aptitud y determinación de la razón por ellos en sus decisiones, en relación al DIH.

Es de anotar que aprobaron conceptos de entes especializados sobre el particular; determinando que son de beneficio para todos los interesados, en el entendido como precisa, oportuna y adecuada para los Estados partes, dado lo anterior la proyección de la jurisprudencia de nivel interamericano presentará una importancia de carácter general, demostrado en un avance significativo en la aplicación tanto de la normatividad vigente como de los principios básicos, sentando precedente de seguridad jurídica aportando un valor agregado corroborando la protección en atención a casos presentados sobre el particular.

A pesar de todo este entramado jurídico para la protección de los derechos humanos estos mismos sistemas ha reconocido la dificultad de los Estados para garantizar en debida forma el pleno ejercicio de estos derechos por parte de las personas sujetas a su jurisdicción, no como un eximente de responsabilidad, sino como un factor para la configuración de una nueva obligación secundaria con respecto a la principal, consistente en satisfacer los derechos de cada una de las personas que vieron vulnerados su derechos por la falta de garantía que tiene el estado con respecto de ellos.

La humanidad como especie desde su origen ha estado en una constante evolución tanto biológica, como en cada uno de los elementos que integran su esencia como persona, de esta manera se han desarrollado pensamientos, técnicas, tecnologías, y hasta la misma genética ha pasado por innumerables cambios, cada uno de estos cambios ha sido en cierta medida violento, como es el cambio en referencia a las relaciones interpersonales y en comunidad, donde la humanidad ha desarrollado conceptos y figuras como el Estado buscando obtener su supervivencia como especie logrando constituir un ente encargado de su protección, no obstante, el alcance de esta finalidad se ve afectado por los diferentes ordenamientos que se han gestado alrededor de la figura Estatal.

En este orden de ideas, como se evidencio en el texto el sustento normativo para la existencia de una obligación sustentada en la falta de cumplimiento en el deber internacional de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, pues, no puede ser factible que a pesar de que concursar a estas conductas los Estados no pueden simplemente reconocer su responsabilidad, sino que deben asumir los deberes que este decreto implica como es el pleno cumplimiento de los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

La protección de los derechos humanos, cada una de las cuales, pero en especial la consagrada en la CADH, impone para dicha protección la modificación del ordenamiento interno.

Referencias.

Barbero, A. (2006). *Construyendo paz en medio de la guerra: Colombia. Agencia española de cooperación internacional.*

Betancur B., Juan Gonzalo, (2010). *Conflicto Armado Interno vs. Amenaza Terrorista: La Disputa por un Concepto. Reflexión Política.* Bucaramanga, Colombia.

Bravo, J.M. (2015). *Impacto del Derecho Internacional Humanitario en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.* Universidad Nacional de Colombia Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Departamento de Derecho Bogotá D.C., Colombia.

CIDH. (2005). *La Corte Interamericana de Derechos Humanos: Un Cuarto de Siglo: 1979-2004.* San José, C.R.

COALICO. (2013). *El Delito Invisible. Criterios para la investigación del delito de reclutamiento ilícito de niños y niñas en Colombia*, p.108. Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia y Comisión Colombiana de Juristas., Bogotá DC, Colombia.

Comité Internacional de la Cruz Roja. (2005). *Derecho Internacional Humanitario. Respuestas a sus preguntas*. Centro de Apoyo en Comunicación para América Latina. Ginebra, Suiza.

Cubides, J. y Vivas, T. (2016). La justicia transicional y el rol de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En *Fundamentación y aplicabilidad de la justicia transicional en Colombia*. Colección JUS Público Núm. 10. Octubre. p. 61 - 103. Universidad Católica de Colombia.

Chaparro, A. y Galindo, C. (2009). *Génesis y Transformaciones del Estado Nación en Colombia*. Editorial Universidad del Rosario. Primera edición. Bogotá D.C., Colombia.

Chávez, E & otros. (2016). *Derechos Humanos, Paz y Posconflicto en Colombia*, p. 162. Bogotá D.C.

De Vitoria, F. (2013). *Doce miradas del conflicto colombiano*. Instituto de estudios internacionales y europeos nº 2.

Doza, E. (2014). *Análisis Del Caso Santo Domingo – Colombia*, p.13. Universidad Militar Nueva Granada. Programa De Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Diplomado de DDHH Y DIH. Bogotá D.C.

Faúndez, H. (2004). *El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos Aspectos institucionales y procesales*. p.25. IIDH.

Ferrer, E. (2010). *El Control Difuso de Convencionalidad en el Estado Constitucional*.

Fuentes, M & Cote, G. (2004). *Tesis El papel de las comisiones de la verdad en la formación de la memoria histórica* p.18. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá D C, Colombia.

Gallego, G. & González, O. (2012). *Conflicto Armado, Justicia y Reconciliación*. p.184. Siglo del Hombre Editores.

Gómez, F y Pureza., J. (2004). *La protección Internacional de los Derechos Humanos en los albores del siglo XXI*. Universidad de Deusto, Bilbao.

González, P. (2014). *Implementación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los Sistemas Jurídicos Nacionales: La Doctrina del Control de Convencionalidad*. Centro de Estudios de Justicia de las Américas.

Gordillo, A. (2000). *Introducción al Derecho: Derecho Público y Privado. Common-law y Derecho Continental Europeo. La creciente internacionalización del derecho*. Casa Editorial Fundación de Derecho Administrativo. Buenos Aires Argentina.

Gutiérrez, C. y Cervell, M.J. (2012). *El Derecho Internacional en la encrucijada*. Curso General de Derecho Internacional Público 3ª ed., Editorial Trotta, Madrid, 605 pp.

Henckaerts. J. M. – Beck. L.D (2007). *El Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario Volumen I Normas*. Con contribuciones de Carolin Alvermann, Knut Dörmann y Baptiste Rolfe Traducido por Margarita Serrano García Primera edición. Buenos Aires, Argentina.

Hernández, D. (2017). *Armas aire-superficie en la Fuerza Aérea Colombiana*. Bogotá D.C., Colombia.

López, Díaz. P. (2009). *Principios Fundamentales Del Derecho Internacional Humanitario*. Corte Interamericana de Derechos Humanos. San José, de Costa Rica.

Martínez-Lazcano, A., Pérez, E., & Cubides, J. (2015, enero-junio). *Implicaciones del Control de Convencionalidad: cumplimiento de la Sentencia Radilla Pacheco versus México y el caso de la masacre de Santo Domingo versus Colombia*. Rev. Cient. Gen. José María Córdova 13(15), 115-141.

Martínez, R. (2014). *La detención operativa en la frontera entre el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos*. Catálogo General de Publicaciones Oficiales. <http://publicacionesoficiales.boe.es/>

Ochoa N. y Salamanca E. (2006). *El Consejo De Derechos Humanos De Las Naciones Unidas: Un Análisis Preliminar*. 12 Revista Electrónica De Estudios Internacionales.

Pacheco, G & otros. (2005). *Verdad, justicia y reparación. Desafíos para la democracia y la convivencia social*. p. 39. IIDH. Edición Sanabria S. A.

Pinto, M. (2003). Publicado en "*Derecho internacional humanitario y temas de áreas vinculadas*", Lecciones y Ensayos nro. 78, p. 6. CICR ref. T2003.49/0003. Buenos Aires, Argentina.

Piñeros, M. (2011). *Análisis De La Cooperación Internacional Entre Organismos Internacionales Y El Gobierno Colombiano En La Protección Y Asistencia De La Población Desplazada Por La Violencia En Colombia. Estudio De Caso: ACNUR-Acción Social, Periodo 1999-2009*. p. 13, Bogotá D.C, Colombia.

Posso, C. (2016). *Memorias de verdad en clave de paz*. Indepaz ediciones. Bogotá D.C.

Ramírez, A. (2010). *Diferencias teórico-prácticas entre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario*. Bogotá, Colombia.

Restrepo, J. y Aponte, D. (2009). *Guerra y violencias en Colombia Herramientas e interpretaciones* (2009). Editorial Pontificia Universidad Javeriana. Primera edición: Bogotá, D.C., Colombia.

Romero M., Flor Alba. (2012). *Tesis Doctoral "Impacto del conflicto armado en la escuela, Departamento de Antioquia, 1985 – 2005"*. Análisis político No. 77. Conflicto Armado, Escuela, Derechos Humanos Y DIH en Colombia, p. 60.

Salmón. E. (2012). *Introducción Al Derecho Internacional Humanitario*. Printed in Lima, Perú.

Schamis, G. (1979). *Las Relaciones Internacionales y la Nueva Guerra*. Centro de Estudios Internacionales (CEI) – CERI. Buenos Aires, Argentina.

Steiner, C. y Uribe, P. (2014). *Convención Americana sobre Derechos Humanos. COMENTARIO*.

Stewart, J. (2003). *Hacia una definición única de conflicto armado en el derecho internacional humanitario. Una crítica de los conflictos armados internacionalizados*. Revista Internacional de la Cruz Roja.

Swinarski, C. (1990). *Principales nociones e institutos del Derecho internacional Humanitario como sistema internacional de protección de la persona humana*. Producido por el Servicio Editorial del IIDH. San José, Costa Rica.

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (2014). *Índice de Riesgo de Victimización 2010 – 2014*. Bogotá D.C., Colombia.

Valencia, A. (1989). *Derecho Internacional y Conflicto Interno: Colombia y el derecho de los conflictos armados*. Bogotá, D.C., Colombia.

Valencia, G. (2006). *La economía frente al conflicto armado interno colombiano, 1990-2006*.

Vivas, T. (2014). Entramado. Revista Entramado Vol. 10 No.1, 2014 (enero - junio). *Un ejercicio de derecho comparado en materia de derechos humano*. Universidad Libre Seccional Cali. Cali, Colombia, p. 183.

Jurisprudencia.

Caso La Masacre de Santo Domingo vs Colombia. (2017). Corte Interamericana de Derechos Humanos. San José, de Costa Rica.

Caso Las Palmeras vs Colombia. (2017). Corte Interamericana de Derechos Humanos. San José, de Costa Rica.

Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-225/95 del dieciocho (18) de mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995). Referencia: expediente No. L.A.T.-040 M.P. Alejandro Martínez Caballero).

Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-653/12 del veintitrés (23) de agosto de dos mil doce (2012). Referencia: expediente T-3408860 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-781/12 del diez (10) de octubre de dos mil doce (2012). Referencia: expediente D-8997 M.P. María Victoria Calle Correa.

Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-253A/12 del veintinueve (29) de marzo de dos mil doce (2012). Referencia: expedientes D-8643 y D-8668 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-290/16 del dos (2) de junio de dos mil dieciséis (2016). Referencia: expediente T- 5.380.829 M.P. Alberto Rojas Ríos.

Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-083/17 del trece (13) de febrero de dos mil diecisiete (2017). Referencia: Expediente T-5.711.182 M.P. Alejandro Linares Cantillo.

Corte IDH, Caso La Masacre de Santo Domingo vs Colombia. Sentencia de 30 de noviembre de (2012). Caso ante la Corte IDH Serie C No. 259 7. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones.

Corte IDH, Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Sentencia Excepciones Preliminares. 4 de febrero de 2000 - Fondo. 6 de diciembre de 2001 - Reparaciones y Costas. 26 noviembre de 2002. Caso ante la Corte IDH Serie C No. 67 Serie C No. 90 Serie C No. 96.

Corte IDH, Caso Comunidades afro-descendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica (Operación Génesis) vs. Colombia. Fechas de presentación de la petición (12.573): 1 de junio de 2004- Fechas de informes de admisibilidad (86/06): 21 de octubre de 2006. Fecha de informe de fondo (64/11): 31 de marzo de 2011.

Corte IDH, Caso Vásquez Durand Y Otros Vs. Ecuador Sentencia De 15 De febrero De 2017. (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).

Corte IDH, Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala Sentencia del 8 de marzo de 1998 (Fondo).

Corte IDH, Caso “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Sentencia Excepciones Preliminares del 11 de septiembre de 1997. 19 de noviembre 1999. Reparaciones y Costas. 26 de mayo de 2001. Caso ante la Corte IDH Serie C No. 32, Serie C No. 63, Serie C No. 77.

Corte IDH, Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares. Sentencia del 27 de enero de 1995 - Fondo, Reparaciones y Costas. 29 de enero de 1997 - Solicitud de Revisión de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. 13 de septiembre de 1997. Caso ante la Corte IDH Serie C No. 21, Serie C No. 30, Serie C No. 45.

Corte IDH, Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Sentencia Fondo. 12 de noviembre de 1997 Reparaciones y Costas. 20 de enero de 1999. Interpretación de la Sentencia de Reparaciones 29 de mayo de 1999. Caso ante la Corte IDH Serie C No. 35, Serie C No. 44, Serie C No. 51.

Corte IDH, Caso 19 comerciantes Vs. Colombia. Sentencia - Excepción preliminar. 12 de junio de 2002 - Fondo, Reparaciones y Costas. 5 de julio de 2004. Caso ante la Corte IDH Serie C No. 93 Serie C No.109.

Corte IDH, Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Sentencia Fondo. 29 de abril de 2004 Reparaciones. 19 de noviembre de 2004. Caso ante la Corte IDH Serie C No. 105 Serie C No. 116.

Legislación.

Colombia, (1991), Constitución política.

Declaración Universal de Derechos Humanos (1948).

El Comité Internacional de la Cruz Roja: guardián del derecho Internacional Humanitario, CICR, Ginebra, 1998, 35 pp., 16 x 23 cm, Ref. 0700 (Agotado).

Convenios de Ginebra de (1949).

Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos de (2002).

ONU. (2011). Protección Jurídica Internacional De Los Derechos Humanos Durante Los Conflictos Armados, New York y Ginebra, p.45. Organización de las naciones unidas.

Naciones Unidas, Derecho internacional humanitario consuetudinario, Principios rectores de los desplazados internos.

Naciones Unidas, Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra de (1949) relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional

Convención Americana de Derechos Humanos: Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos.), Artículo 19 (Derecho de niño), Artículo 21 (Derecho a la propiedad privada), Artículo 22 (Derecho de circulación y de residencia), Artículo 25 (Protección Judicial), Artículo 4 (Derecho a la vida), Artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal), Artículo 8 (Garantías Judiciales).

San José, (1969), Convención Americana de Derechos Humanos.

Principios Internacionales del Derecho Internacional Humanitario (2009) CIDH.